

BOP

Córdoba

Año CLXXXIII

Sumario

VI. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Anuncio de la Excm. Diputación Provincial de Córdoba por el que se hace público expediente de Modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de esta Corporación
p. 2366

Resolución de la Excm. Diputación Provincial de Córdoba por lo que se publica la declaración inhábil del mes de agosto de 2018 en relación con los diversos procesos selectivos de esta Corporación
p. 2386

Ayuntamiento de La Carlota

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Carlota por el que se hace público el listado definitivo de la convocatoria de 1 plaza de Oficial Policía Local, mediante promoción interna, nombramiento Tribunal Calificador y convocatoria al mismo para la valoración de méritos
p. 2386

Ayuntamiento de Córdoba

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba por el que se aprueban las Bases Regulatorias del Programa de Ayudas Económicas de los Servicios Sociales Municipales
p. 2387

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba por el que se hace público los acuerdos de Modificaciones de Crédito del Presupuesto del año 2018
p. 2400

Ayuntamiento de Hornachuelos

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a información pública el Plan Estratégico para la Recuperación del Casco Antiguo
p. 2403

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a información pública la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
p. 2403

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a información pública la Ordenanza Fiscal de ciertos servicios municipales
p. 2403

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a informa-

ción pública la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

p. 2403

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a información pública la Ordenanza municipal reguladora de la prestación económica por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable

p. 2403

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a información pública la Ordenanza Fiscal de la tasa por prestación de actividades formativas organizadas por esta Corporación

p. 2403

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a información pública la Ordenanza municipal reguladora del aparcamiento y estancia de autocaravanas y caravanas

p. 2403

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a información pública la Ordenanza reguladora municipal por aprovechamiento de las aguas subterráneas en el pozo de Calle El Quejigo

p. 2404

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a información pública la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local

p. 2404

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a información pública la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la prestación de Servicios en la Piscina e Instalaciones Deportivas

p. 2404

Acuerdo del Ayuntamiento de Hornachuelos por el que se somete a información pública el estudio de viabilidad previo del contrato mixto de concesión del servicio de Residencia de Mayores

"San Bernardo", y concesión de obras de ampliación de la misma

p. 2404

Ayuntamiento de Iznájar

Anuncio del Ayuntamiento de Iznájar por el que se hace público extracto de la Convocatoria de Subvenciones dentro del Programa Municipal "Iznájar Emprende" durante el ejercicio 2018

p. 2404

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba por el que se hace público extracto de la Convocatoria de Subvenciones para Ayudas al Alquiler Joven 2018

p. 2405

Ayuntamiento de El Viso

Anuncio del Ayuntamiento de El Viso por el que se hace público la aprobación del Plan Económico-Financiero 2018/2019 por el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria y urgente, de fecha 7 de junio de 2018

p. 2405

Entidad Local Autónoma de Encinarejo

Anuncio de la Entidad Local Autónoma de Encinarejo de Córdoba por el que se hace público el Presupuesto General y Plantilla de Personal para el ejercicio 2018

p. 2405

VII. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 3. Córdoba

Procedimiento 1260/17, Ejecución de títulos judiciales 160/2017: Notificación Resolución

p. 2406

Juzgado de lo Social Número 4. Córdoba

Procedimiento Social Ordinario 329/2017: Notificación Resolución

p. 2407

ADMINISTRACIÓN LOCAL**Diputación de Córdoba**

Núm. 2.093/2018

En el Boletín Oficial de la Provincia, número 78, de 24 de abril de 2018, fue insertado el anuncio nº 1.363/2018, exponiendo al público a efectos de reclamaciones, del acuerdo provisional adoptado por el Pleno de la Diputación de Córdoba de modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de ingresos de Derecho público de esta Diputación.

Este acuerdo fue adoptado inicialmente por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sin que se hayan presentado reclamaciones al acuerdo citado, conforme a lo establecido en el artículo 17.3 del citado Texto Refundido, este acuerdo queda adoptado definitivamente, insertándose a continuación el texto íntegro de la Ordenanza afectada que ha visto modificada su redacción, conforme dispone el artículo 17.4 del mismo Texto Refundido.

“ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA**TÍTULO PRELIMINAR**

Artículo 1. En ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 106.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Diputación Provincial de Córdoba ha acordado aprobar la presente Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba, cuyas normas contienen los principios básicos y comunes de aplicación para todos los ingresos de derecho público provinciales, formando parte integrante de sus respectivas ordenanzas particulares.

Artículo 2. La presente Ordenanza, será de aplicación en el ejercicio de las facultades que con relación a sus ingresos de derecho público, hubieran delegado en la Diputación Provincial otros entes locales de la provincia de Córdoba. Asimismo, también se aplicará en el ejercicio de las funciones recaudatorias asumidas mediante convenio con otras Entidades de derecho público, en todo aquello que no se encuentre regulado expresamente en el mismo.

Artículo 3. 1. La gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos, se registrá:

a) Por la Ley General Tributaria, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como por las disposiciones dictadas para su desarrollo, en todo aquello que no sea de aplicación supletoria por disponerlo así de forma expresa la referida norma.

b) Por las leyes que dicte la Comunidad Autónoma de Andalucía en los supuestos expresamente previstos por la legislación del Estado.

c) Por las Ordenanzas reguladoras de cada ingreso público.

d) Por la presente Ordenanza General.

2. Corresponderá a la Presidencia de Diputación, dictar las dis-

posiciones interpretativas y aclaratorias que fueran necesarias, así como las Instrucciones de desarrollo que se consideren precisas para posibilitar la correcta aplicación de la presente Ordenanza General.

3. La Presidencia de Diputación podrá delegar el ejercicio de las competencias reguladas en esta Ordenanza, salvo en los supuestos en que legalmente estuviera prohibido.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, las normas contenidas en la presente Ordenanza General que hacen referencia a los tributos, deberán entenderse aplicables siempre que fuere posible a cualquier otro ingreso de Derecho público.

Artículo 5. Para el ejercicio de las funciones reguladas en la presente Ordenanza, la Diputación de Córdoba ha creado el Organismo Autónomo de carácter administrativo denominado “Instituto de Cooperación con la Hacienda Local” (en adelante “Organismo”), al que se le confieren todas las prerrogativas establecidas en la legislación vigente para la gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos que se le encomienden.

Artículo 6. Con carácter general, la gestión, inspección y recaudación de todos los ingresos de Derecho público provinciales, deberá llevarse a cabo por el Organismo Autónomo creado al efecto. No obstante lo anterior, excepcionalmente, previa acreditación de las razones de carácter operativo y eficiencia procedimental que lo justifiquen, podrá acordarse por el Pleno de la Diputación de forma expresa, que las referidas funciones puedan ejercerse directamente por los servicios de la propia Diputación.

Como aportación económica para el sostenimiento del servicio, la Diputación provincial autoriza al Organismo, para que detraiga mediante el correspondiente descuento en las liquidaciones periódicas de ingresos que debe efectuar, el 2,5 por 100 de los importes recaudados en concepto de principal de las deudas provinciales y el 100 por 100 de los ingresos realizados en concepto de recargo ejecutivo durante el procedimiento de apremio.

Las competencias asignadas en la presente Ordenanza a los órganos del Organismo Autónomo, deberán entenderse referidas a los órganos que corresponda de la Diputación según su régimen orgánico, cuando las competencias sean ejercidas directamente por la misma.

Artículo 7. En orden a cumplir con el principio de eficacia que debe inspirar la actuación administrativa, el Organismo Autónomo empleará todos los recursos disponibles por la informática y las telecomunicaciones al servicio de la gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos. En consecuencia, se exigirá siempre que fuera posible, la utilización de los aplicativos informáticos de gestión necesarios para conseguir:

-La automatización de los procedimientos administrativos, agilizando la producción de actos jurídicos y su comunicación a los interesados.

-La implantación de la firma electrónica para todos los documentos generados por medios informáticos, garantizando la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerce.

-Posibilitar el archivo y reproducción en formato digital de la documentación producida por medios informáticos o que siendo generada por procedimientos tradicionales posteriormente pudiera ser susceptible de digitalización, validada electrónicamente, garantizando la integridad de la documentación almacenada y su seguridad. Los documentos emitidos por el Organismo Autónomo como copias de los originales almacenados por estos medios, gozarán de la validez y eficacia del documento original.

-El establecimiento de procedimientos para facilitar el acceso

de los administrados a la información que les afecta, incluida la realización de trámites a través de medios telemáticos utilizando sistemas seguros de comunicación y firma electrónica.

Artículo 8. El Organismo Autónomo, mantendrá en sus dependencias bajo la dirección de la Secretaría, un Registro General de documentos informatizado, donde se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida, asientos relativos a todos los escritos o comunicaciones referidos a su gestión.

El funcionamiento de este Registro se regirá por idénticas normas que el de la Diputación provincial de Córdoba.

El Organismo con la finalidad de facilitar a los ciudadanos la presentación de comunicaciones, podrá crear Registros Auxiliares del General, al que comunicarán toda anotación que efectúen.

Con referencia a los asientos existentes en el libro del Registro, podrán expedirse certificaciones autorizadas por la Secretaría.

Artículo 9. Los obligados tributarios, gozarán de los derechos y garantías expresamente reconocidos en la Ley General Tributaria, entre los cuales, se encuentra el derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.

La competencia para la expedición de copias auténticas sobre los documentos que obren en los expedientes del Organismo Autónomo, corresponderá a la Secretaría, excepto cuando fuere posible la generación informática de copias validadas electrónicamente sobre documentos almacenados en forma digital.

La obtención de copias, de la documentación obrante en los expedientes, requerirá el previo pago de la tarifa aprobada al efecto en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 10. Los datos, informes o antecedentes obtenidos para la gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos, tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada el Organismo y, para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.

El personal dependiente del Organismo que tenga conocimiento por razón de su actividad de estos datos, informes o antecedentes, estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPÍTULO I

El hecho imponible

Artículo 11. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, consistente en el pago de la cuota tributaria.

La Ley podrá completar la determinación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.

Artículo 12. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.

La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.

Artículo 13. En los actos o negocios jurídicos en los que se produzca la existencia de simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia

de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados.

Artículo 14. Se entenderá que no existe extensión del hecho imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados en fraude de ley, con la intención de eludir el pago del tributo, siempre que produzcan un resultado semejante al derivado del hecho imponible.

CAPÍTULO II

De los beneficios fiscales

Artículo 15. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 16. La competencia para la concesión o denegación de beneficios fiscales sobre los tributos cuya gestión se encuentre encomendada al Organismo, corresponderá a la Presidencia, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar.

Artículo 17. La concesión de beneficios fiscales, exceptuando los supuestos en que una ley dispusiera lo contrario, tendrá carácter rogado, por lo que deberá iniciarse su tramitación a instancia del interesado, atendiendo a los plazos y requisitos previstos en la Ordenanza fiscal reguladora del tributo.

Artículo 18. Siempre que no exista regulación expresa en contrario, con carácter general la concesión de beneficios fiscales surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente a la fecha en que se hubiere formalizado la solicitud. No obstante podrá instarse la solicitud una vez iniciado el período impositivo siempre que no hubiera adquirido firmeza el acto de liquidación y se reunieran los requisitos para su concesión con anterioridad a la fecha del devengo.

CAPÍTULO III

Las obligaciones tributarias accesorias

Artículo 19. Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley.

Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias.

Artículo 20. Con carácter general, los intereses de demora se liquidarán y exigirán en el momento del pago de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.

Artículo 21. En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquél fuese superior.

En los supuestos de embargo de dinero en efectivo o en cuentas o créditos, se liquidarán y retendrán los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue.

Artículo 22. La liquidación de intereses se practicará en todo caso hasta la fecha de emisión del abonaré representativo de la deuda para su abono en las Entidades Colaboradoras de la Recaudación, quedando liberado del crédito el deudor con la realización del ingreso dentro del plazo de validez señalado en el documento. Transcurrido el plazo límite de validez del abonaré sin que se hubiera realizado el ingreso, quedará sin efectos la liquidación de intereses efectuada, la cual deberá ser actualizada con ocasión de la emisión de un nuevo documento representativo de la deuda para su pago.

Artículo 23. En el ámbito de la Diputación provincial de Córdoba, se practicará liquidación por intereses de demora en todos los supuestos contemplados en la legislación vigente, con indepen-

dencia de la cuantía que pudieran alcanzar. En consecuencia, no resultará de aplicación la previsión contemplada en el artículo 72.5 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005).

CAPÍTULO IV

Los obligados tributarios

Artículo 24. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Artículo 25. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la Ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.

Artículo 26. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley o en su caso de la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora del tributo, y en lugar de aquél, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.

Artículo 27. Cuando la Ley así lo establezca, tendrán la consideración de obligados tributarios las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

Los partícipes o cotitulares a que se refiere el apartado anterior, serán responsables solidarios en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dicha entidad.

Artículo 28. Las liquidaciones tributarias únicamente podrán ser divisibles en el supuesto de concurrencia de varios obligados tributarios. En consecuencia, cuando el obligado tributario sea alguna de las entidades a que se refiere el artículo anterior, la deuda se exigirá íntegramente a la misma y en caso de derivación de responsabilidad a cualquiera de los partícipes o cotitulares.

Artículo 29. Los actos o convenios entre particulares carecerán de efectos ante la Administración en relación con la determinación del sujeto pasivo y demás elementos de la obligación tributaria.

Artículo 30. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente, será obligación de todo sujeto pasivo:

- i. Formular las declaraciones y comunicaciones exigidas para la gestión de cada tributo.
- ii. El pago de la deuda.
- iii. Llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos que en cada caso se establezca.
- iv. Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones.
- v. Proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.
- vi. Indicar expresamente la Referencia Catastral en cualquier declaración o reclamación relacionada con bienes inmuebles.
- vii. Aportar copia de la documentación acreditativa de su identificación personal cuando le sea requerida.
- viii. Aportar el justificante del pago de la deuda cuando sea requerido para ello.
- ix. Declarar el domicilio a efectos de notificaciones y cualquier alteración que se produzca en el mismo.
- x. Informar a requerimiento de la Administración sobre los bienes y derechos que conforman su patrimonio.

Artículo 31. La Ley podrá declarar responsables de las deudas, junto a los sujetos pasivos, a otras personas, solidaria o subsidiariamente.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad

será siempre subsidiaria.

Para la derivación de la acción administrativa a los responsables, se requerirá en todo caso un acto administrativo, previa audiencia al interesado por un plazo de quince días, en el que se declarará la responsabilidad y se determinará su alcance y extensión. Este acto administrativo será notificado reglamentariamente confiriéndole al responsable desde dicho instante todos los derechos del sujeto pasivo.

Cuando la declaración de responsabilidad se efectúe con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, la competencia le corresponderá al órgano que aprobó la liquidación, en los demás supuestos la competencia le corresponderá a la Gerencia del Organismo.

Artículo 32. Disuelta y liquidada una sociedad, entidad o fundación, el procedimiento de recaudación continuará con sus socios, partícipes, cotitulares o destinatarios, que se subrogarán a estos efectos en la misma posición en que se encontraba la sociedad, entidad o fundación en el momento de la extinción de la personalidad jurídica. Para ello, se dirigirá notificación a los mismos con requerimiento para el pago de la deuda en los plazos establecidos legalmente.

Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, el procedimiento de recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquél y la notificación al sucesor requiriéndole para el pago de la deuda y costas pendientes del causante, con subrogación a estos efectos en la misma posición en que se encontraba el causante en el momento del fallecimiento.

CAPÍTULO V

El domicilio fiscal

Artículo 33. El domicilio fiscal tanto de las personas físicas como jurídicas será único a efectos de sus relaciones con el Organismo Autónomo.

Para la determinación del domicilio fiscal se seguirán los criterios establecidos en la Ley General Tributaria y demás legislación complementaria.

Artículo 34. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de cada año natural vendrán obligados a designar un representante con domicilio en la provincia de Córdoba, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Provincial.

Artículo 35. Es obligación de todos los sujetos pasivos declarar su domicilio correcto, especialmente cuando tuvieren constancia de que la Administración lo desconoce. A estos efectos, se considerará como domicilio conocido por el sujeto pasivo, el que consta en los registros públicos que constituyen los censos a partir de los cuales se generan las liquidaciones de ingreso periódico.

Artículo 36. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento del Organismo Autónomo, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio pueda producir efectos frente a la Administración tributaria hasta tanto se lleve a cabo la citada declaración.

Artículo 37. El Organismo Autónomo podrá comprobar y rectificar de oficio el domicilio de los obligados tributarios en cualquier momento para subsanar los errores que sean detectados en el curso de la gestión.

TÍTULO SEGUNDO

Normas relativas a la Gestión Tributaria

CAPÍTULO I

Disposiciones sobre el Procedimiento

Artículo 38. Corresponderá a la Presidencia del Organismo Autónomo, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar, la

resolución en general de todos los procedimientos de gestión tributaria.

Corresponderá a la Gerencia del Organismo Autónomo la resolución de los procedimientos que pudiera encomendarle mediante delegación la Presidencia, y en general, procurar la correcta tramitación y cumplimentación de todos los expedientes tributarios, impulsando los actos de trámite que fueran necesarios y velar por la correcta aplicación de los acuerdos adoptados.

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación de la Presidencia, indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Artículo 39. Las resoluciones dictadas por la Presidencia o por delegación de la misma, serán notificadas por la Secretaría del Organismo.

Las resoluciones dictadas por la Gerencia del Organismo en ejercicio de sus propias competencias, serán notificadas por la Jefatura del Área Tributaria o en sustitución del mismo por la Jefatura del Servicio correspondiente.

Las resoluciones dictadas por la Tesorería del Organismo, serán notificadas por la Jefatura del Servicio de Gestión Recaudatoria.

Los requerimientos y comunicaciones sobre actos de trámite dictados en el curso del procedimiento, serán notificados por la Jefatura del Servicio o en sustitución del mismo por la Jefatura del Departamento correspondiente.

Artículo 40. Exceptuando aquellos supuestos en que la normativa tributaria vigente le otorgue el carácter de definitivas, las liquidaciones tributarias practicadas por el Organismo Autónomo tendrán el carácter de provisionales.

Las liquidaciones tributarias practicadas por el Organismo con el carácter de provisionales, podrán ser rectificadas mediante las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria previstos en la legislación vigente.

Artículo 41. El Organismo Autónomo está obligado a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos iniciados de oficio o a instancia de parte, excepto en los siguientes casos:

a) Procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación.

b) Cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.

Todos los actos administrativos dictados en el curso de los procedimientos tributarios, deberán estar motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

Artículo 42. Exceptuando los supuestos en que la norma del procedimiento establezca otra cosa, el plazo máximo de resolución será de seis meses.

En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo se contará desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio, en los iniciados a instancia de parte, el plazo se contará desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el registro del Organismo.

Los períodos de interrupción justificada por la necesidad de cumplimentación de trámites por otras administraciones y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable al Organismo, interrumpirán el cómputo del plazo para resolver.

Corresponderá a los distintos Jefes de Servicio del Organismo Autónomo, la responsabilidad de que la obligación de resolución expresa se haga efectiva en los plazos establecidos.

Cuando el número de expedientes abiertos impidan razonablemente el cumplimiento de los plazos previstos en el procedimien-

to aplicable o el plazo máximo de resolución, el Jefe del Servicio lo comunicará a su inmediato superior, con la finalidad de que por parte de la Gerencia del Organismo puedan adoptarse las medidas que se consideren más adecuadas para resolver la situación.

Artículo 43. En aplicación del criterio de celeridad para la tramitación de todos los procedimientos tributarios, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, se facilitará siempre que fuera posible, la acumulación de expedientes que guarden identidad sustancial o íntima conexión.

En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por acuerdo de la Gerencia se dé orden motivada en contrario, de la que quedará constancia.

Artículo 44. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo establecido para la resolución sin que el órgano competente la hubiera dictado, producirá los efectos previstos legalmente para el silencio administrativo. En estos procedimientos, la falta de resolución en plazo deberá considerarse como desestimación, en los siguientes casos:

i. Resolución de recursos administrativos.

ii. Solicitud de beneficios fiscales.

iii. Suspensión del procedimiento siempre que no se hubiere aportado garantía suficiente.

iv. Solicitud de devolución de ingresos indebidos.

v. En los demás supuestos previstos legalmente.

Se considerará estimada la solicitud por silencio administrativo en los casos previstos en la normativa vigente.

Artículo 45. Siempre que por ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los plazos expresados en días, meses o años, se contarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o la publicación del acto, o en su caso la finalización de la exposición pública del mismo, o desde el día siguiente a aquél en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

Artículo 46. En los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos, las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción, así como de la fecha, la identidad de quien la recibe y el contenido del acto notificado.

Atendiendo al carácter masivo de las notificaciones generadas en los procedimientos tributarios locales, la acreditación de la notificación se archivará separadamente del expediente en un lugar específicamente destinado al efecto, utilizando para ello sistemas informáticos que permitan la automatización de su tratamiento y su posterior localización para unirla al expediente cuando fuera precisa su aportación.

La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado por el interesado o su representante. En otro caso, la notificación se realizará en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

Cuando en el momento de realizarse la notificación, no se hallare presente el interesado o su representante, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el lugar o domicilio y haga constar su identidad.

En el supuesto de que el interesado o su representante rechacen la notificación, se hará constar las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá la misma por efectuada a todos los efectos legales.

Artículo 47. Cuando intentada la notificación por dos veces, ésta no pudiera realizarse por ausencia del interesado o su representante, se dejará nota de aviso en el domicilio con el fin de que pueda ser retirada la notificación de las oficinas del servicio de notificación en el plazo de una semana. Transcurrido el referido plazo, si no se hubiere retirado la notificación de las oficinas, se archivará el acuse de recibo haciendo constar los dos intentos de notificación efectuados y su resultado.

Será suficiente con un solo intento de notificación, cuando el destinatario conste como desconocido en el domicilio.

Artículo 48. Cuando no hubiere sido posible realizar la notificación en los supuestos contemplados en el artículo anterior, es decir, por causas no imputables a la Administración, por resultar ausente o desconocido el interesado en el domicilio o lugar señalado, o ignorarse el lugar de la notificación, se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el Boletín Oficial del Estado, todo ello de conformidad con la regulación contenida en la Ley General Tributaria.

Artículo 49. Para la práctica de las notificaciones, el Organismo podrá utilizar los servicios de Correos o de otras empresas especializadas contratadas al efecto, así como personal propio o dependiente de los Ayuntamientos de la provincia.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, todos los anuncios de inserción obligatoria derivados de los procedimientos tributarios gestionados por el Organismo, cuyo coste no pueda ser repercutido a terceros, gozará de exención en la Tasa provincial por la prestación de Servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

CAPÍTULO II

Revisión de los Actos

Artículo 50. Corresponderá al Consejo Rector del Organismo Autónomo, la resolución de los procedimientos de declaración de nulidad de pleno derecho y de declaración de lesividad de actos anulables dictados en vía de gestión tributaria.

Artículo 51. 1. El Organismo podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiere transcurrido el plazo de prescripción.

2. De otra parte, el Organismo podrá revocar de oficio sus actos en beneficio de los interesados, siempre que no hubiere transcurrido el plazo de prescripción, cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

Artículo 52. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho público gestionados por el Organismo Autónomo, sólo podrá interponerse el recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, regulado en el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, debe entenderse sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la posibilidad de for-

mular reclamaciones económico-administrativas contra los actos dictados en vía de gestión de los tributos locales. En estos casos, cuando el acto haya sido dictado por el Organismo Autónomo, el recurso de reposición será previo a la reclamación económico-administrativa.

Artículo 53. El Recurso de Reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita.

Contra los actos administrativos de aprobación de padrones o matrículas y de las liquidaciones tributarias incluidas en los mismos, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano que los aprobó, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública.

El Recurso de Reposición se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, exceptuando los casos de interrupción del cómputo de este plazo previstos legalmente.

Artículo 54. Contra la desestimación del Recurso de Reposición, puede interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en los siguientes plazos:

- i. Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo.
- ii. Si la resolución ha sido tácita, en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquél en que debió entenderse desestimado el recurso, de acuerdo con las normas reguladoras del silencio administrativo.

CAPÍTULO III

Suspensión del procedimiento

Artículo 55. La interposición de cualquier recurso administrativo no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso, aportando garantía suficiente.

Artículo 56. Corresponderá la competencia para tramitar y resolver la solicitud de suspensión al órgano que dictó el acto impugnado.

La suspensión podrá solicitarse en cualquier momento mientras dure la sustanciación del recurso, si bien, cuando no se solicite en el momento de su interposición, sólo podrá afectar a las actuaciones que se produzcan con posterioridad.

Si el recurso interpuesto no afecta a la totalidad de los conceptos comprendidos en el acto o liquidación, la suspensión se referirá sólo a los que sean objeto de impugnación, siempre que sea posible la liquidación separada de tales conceptos, quedando obligado el recurrente a ingresar el resto en los plazos reglamentarios.

Las resoluciones desestimatorias de la suspensión deberán motivarse y sólo serán susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa.

Artículo 57. Cuando la ejecución del acto hubiere estado suspendida, una vez concluida la vía administrativa, no se iniciarán o, en su caso, no se reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el Recurso Contencioso-Administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución se mantenga hasta entonces. Cuando el interesado interponga recurso contencioso-administrativo la suspen-

sión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.

Una vez desestimado el recurso interpuesto en vía administrativa o judicial, se exigirán los correspondientes intereses de demora en la cuantía establecida en el artículo 26 de la Ley General Tributaria, por todo el período de suspensión. Si la interposición del recurso se realizó en período voluntario, se notificará al interesado la deuda concediéndole el mismo plazo para el pago en período voluntario que el previsto para las liquidaciones de ingreso directo, advirtiéndole que transcurrido el mismo sin que se hubiese efectuado el pago, se procederá a la ejecución de la garantía aportada.

Artículo 58. La garantía será devuelta o liberada cuando se pague la deuda, incluidos los recargos, intereses y costas, así como los intereses devengados durante la suspensión, o cuando se acuerde la anulación del acto.

Cuando en una liquidación se anulen recargos, intereses u otros elementos distintos de la cuota, la garantía seguirá afectada al pago de la deuda subsistente, pero podrá ser sustituida por otra que cubra solamente el nuevo importe de la deuda.

Artículo 59. Quedará automáticamente suspendida la ejecución de los actos impugnados con contenido económico, desde el momento en que el interesado lo solicite y aporte garantía bastante para cubrir el total de la deuda más los intereses de demora que se originen por la suspensión, conforme a las siguientes normas:

a) La garantía deberá constituirse ajustándose a los modelos aprobados por el Organismo Autónomo.

b) La garantía deberá consistir en alguna de las siguientes:

i. Dinero efectivo o valores públicos, depositados en la Caja del Organismo. Cuando se trate de deuda pública anotada se aportará certificado de inmovilización del saldo correspondiente a favor del Organismo Autónomo.

ii. Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de crédito o Sociedad de garantía recíproca, o contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

iii. Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de la misma localidad de reconocida solvencia, sólo para deudas que no excedan de 600 euros por principal.

iv. Aportada la garantía exigida, la suspensión se entenderá acordada desde la fecha de la solicitud. Si la solicitud no viniera acompañada de la correspondiente garantía, no habrá lugar a la suspensión automática del acto.

Artículo 60. Si la garantía aportada no fuera considerada bastante, se concederá al interesado un plazo de diez días para subsanar los defectos.

De no producirse la subsanación requerida, el servicio correspondiente emitirá informe motivado sobre la improcedencia de la suspensión, que se someterá al órgano competente para resolver. Dictada la resolución desestimatoria de la suspensión solicitada, podrá proseguir la ejecución del acto administrativo impugnado.

Las actuaciones llevadas a cabo en relación con la solicitud de suspensión, se archivarán en el expediente del recurso interpuesto.

Artículo 61. Cuando el interesado no pueda aportar la garantía prevista en el artículo 59 de esta Ordenanza, podrá suspenderse excepcionalmente la ejecución del acto, sin automatismo, previa justificación de que la ejecución causaría perjuicios de imposible

o difícil reparación y se ofrezca cualquier otro tipo de garantía que se considere suficiente.

No obstante, aun cuando el interesado no pueda aportar garantía con los requisitos anteriores, se podrá decretar la suspensión si se aprecian los referidos perjuicios.

Así mismo, podrá acordarse la suspensión sin necesidad de garantía, cuando la Administración aprecie que al dictar el acto impugnado se ha incurrido en error aritmético, material o de hecho.

La solicitud de suspensión aportará las alegaciones y documentos precisos en orden a acreditar la concurrencia de los requisitos señalados en los párrafos anteriores. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a dejar en suspenso el acto administrativo impugnado con efectos desde el día de presentación de la solicitud y hasta tanto se proceda a la resolución de la misma.

Artículo 62. No se podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio, hasta que la liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de este deber, antes de proceder a la enajenación de los bienes, se comprobará que no existe recurso pendiente de resolución en vía administrativa o judicial.

Se exceptúa de lo previsto en los párrafos anteriores, los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los cuales existe un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el obligado tributario solicite de forma expresa su enajenación.

CAPÍTULO IV

Devolución de ingresos indebidos

Artículo 63. Los obligados tributarios y los sujetos infractores, así como sus sucesores, tendrán derecho a solicitar la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado a la Administración provincial con ocasión del pago de deudas de Derecho público, siguiendo el procedimiento establecido legalmente.

Artículo 64. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución podrá iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada.

No obstante lo anterior, procederá la iniciación de oficio en los siguientes supuestos:

-Cuando proceda en los acuerdos de ejecución de resoluciones judiciales.

-Siempre que se hubiere dictado cualquier acuerdo o resolución administrativa, que suponga la rectificación, revisión o anulación de actos administrativos que hubieren dado lugar al ingreso de una deuda tributaria indebidamente o en cuantía superior a la que legalmente procedía.

-Cuando la Administración tenga constancia del carácter indebido de un ingreso por duplicidad o exceso en el pago de una deuda, o por el ingreso de deudas prescritas, siempre que no haya prescrito el derecho a la devolución.

Por razones de eficacia, economía y racionalidad únicamente se iniciará la tramitación de oficio del reconocimiento del derecho a la devolución, cuando el ingreso indebido supere la cuantía de 12 euros.

Artículo 65. La competencia para resolver sobre el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos, corresponderá a la Presidencia del Organismo, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar.

Artículo 66. Cuando el procedimiento de devolución por ingreso indebido se inicie a instancia del interesado, la solicitud se dirigirá a la Presidencia del Organismo y deberá contener:

i. Nombre y apellidos o razón social, número de identificación

fiscal y domicilio del interesado, y en su caso del representante.

ii. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

iii. Justificación del ingreso indebido.

iv. Declaración expresiva del medio elegido para la realización de la devolución de entre los ofrecidos por el Organismo. Preferentemente, la devolución se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta identificada por el interesado mediante el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN).

v. Lugar, fecha y firma.

A la solicitud se adjuntarán los documentos que acrediten el derecho a la devolución, así como el justificante original del ingreso realizado, que según los casos podrá consistir en Carta de pago, abonar diligenciado por una Entidad Colaboradora de la Recaudación o adeudo en cuenta tramitado mediante orden de domiciliación, banca electrónica o Cajero automático.

En el caso de pago duplicado, deberán aportarse los justificantes originales de los dos ingresos realizados, quedando en poder de la Administración un original y la copia diligenciada del otro que será devuelto al interesado.

Los justificantes de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha, el lugar del ingreso y su importe.

Artículo 67. Reconocido el derecho a la devolución, se procederá al pago de las siguientes cantidades:

-El importe del ingreso indebidamente efectuado correspondiente al principal de la deuda, recargos o intereses.

-Las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera realizado durante el procedimiento de apremio.

-El interés por demora que corresponda legalmente, aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas, por el tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso, hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

El pago se realizará ordinariamente mediante transferencia bancaria a la cuenta expresamente indicada por el interesado en el curso de la tramitación del expediente.

Cuando el interesado no hubiera indicado otra distinta, la devolución se tramitará a la cuenta de su titularidad que conste en base de datos de terceros acreedores del Organismo, o alternativamente a la que pudiera constar a efectos recaudatorios. En este supuesto, en el traslado al interesado de la resolución, se incluirá la cuenta donde se ha previsto realizar la devolución, con la finalidad de que en el plazo de 10 días, pueda indicarse otra distinta si no está conforme.

Cuando se desconozca una cuenta bancaria donde realizar la devolución, se requerirá al interesado mediante notificación para que cumplimente el formulario establecido a tal fin, donde se identificará la cuenta de su titularidad mediante el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN).

Artículo 68. No procederá el abono de intereses de demora en los siguientes supuestos de devolución de ingresos:

-Cuando proceda la devolución parcial de la cuota ingresada como consecuencia de circunstancias sobrevenidas que determinen la aplicación de las reglas de prorrateo establecidas legalmente.

-Cuando el derecho a la devolución se origine como consecuencia de la aplicación de beneficios fiscales de carácter rogado, solicitados con posterioridad al devengo del tributo.

-Cuando se produzcan ingresos improcedentes por el propio interesado, una vez cancelada la deuda, siempre que no hubiere mediado requerimiento alguno por parte de la Administración. La devolución de estos ingresos improcedentes se llevará a cabo de

oficio por el Organismo siempre que la cuantía de los mismos supere el importe de 12 euros.

Artículo 69. La devolución se realizará directamente por el Organismo Autónomo, repercutiéndose posteriormente a la Administración titular del ingreso, con sus correspondientes intereses, mediante deducción en la primera liquidación de ingresos que se efectúe.

En el supuesto de que el ingreso indebido se hubiere realizado en otra Administración local, con anterioridad a la delegación de sus competencias de gestión y recaudación a favor de la Diputación, se solicitará de la referida Administración que aporte certificación de la Intervención sobre la efectiva realización del ingreso y su no devolución, como requisito previo al reconocimiento del derecho a la devolución.

CAPÍTULO V

Reintegro del coste de las garantías

Artículo 70. La Administración reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.

Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías.

En los tributos de gestión compartida, corresponderá efectuar el reembolso del coste de las garantías a la Administración que hubiese dictado el acto que haya sido declarado improcedente, en consecuencia, la solicitud de reembolso deberá dirigirse a la citada Administración.

Artículo 71. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado mediante solicitud en la que deberá hacer constar lo siguiente:

a) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio del interesado, y en su caso del representante.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

c) Declaración expresiva del medio elegido para la realización de la devolución de entre los ofrecidos por el Organismo. Preferentemente, la devolución se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta identificada por el interesado mediante el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN).

d) Lugar, fecha y firma del solicitante.

e) Órgano al que se dirige la petición.

A la solicitud, se adjuntará obligatoriamente, copia de la resolución administrativa o sentencia judicial firme por la que se declare improcedente el acto o la deuda, así como la acreditación del importe al que ascendió el coste de las garantías cuyo reembolso se solicita, con indicación de la fecha efectiva de pago.

Artículo 72. A efectos de proceder a su reembolso, el coste de las garantías se determinará de acuerdo con los criterios fijados en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 73. Cuando la propuesta de resolución, determine un importe a rembolsar diferente al solicitado por el interesado, se cumplimentará el trámite de audiencia para que pueda alegar lo que considere conveniente a su derecho.

La resolución del expediente se dictará en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha en que haya tenido entrada el escrito de solicitud de reembolso.

Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se haya producido, se podrá entender desestimada la solicitud a efectos de interponer el correspondiente Recurso Contencioso-Administrativo. No obstante lo anterior, la Administración podrá resolver con pos-

terioridad al vencimiento del plazo, sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Artículo 74. La resolución determinará la procedencia del reembolso de los costes de la garantía aportada, concretando las cantidades que deberán abonarse, en cuanto han quedado debidamente acreditadas y correspondan a la suspensión de la deuda declarada total o parcialmente improcedente.

Los pagos realizados por el Organismo Autónomo referidos a este concepto, se repercutirán a la Administración titular de la deuda declarada improcedente, mediante deducción practicada en la primera liquidación de ingresos que se realice.

Artículo 75. En todo caso, el derecho al reembolso de los costes de las garantías, prescribirá a los cuatro años de la firmeza de la sentencia o resolución administrativa que declare la improcedencia del acto o de la deuda tributaria.

CAPÍTULO VI

Gestión de Impuestos Municipales Obligatorios

Sección I: Normas generales

Artículo 76. Corresponderá al Organismo Autónomo, en relación con los Impuestos municipales obligatorios sobre Bienes Inmuebles, Vehículos de Tracción Mecánica y Actividades Económicas, cuando los respectivos Ayuntamientos hubieren delegado sus facultades de gestión tributaria a favor de la Diputación de Córdoba, la conformación en general de los diferentes expedientes de gestión censal y tributaria que procedan. En concreto y a modo meramente enunciativo, deberá elaborar la documentación oficial para las declaraciones obligatorias de los contribuyentes, practicar las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, formular requerimientos a los interesados, expedir certificados acreditativos sobre la situación censal y sobre el estado de las deudas, resolver los recursos y reclamaciones que se presenten, conceder y denegar beneficios fiscales, realizar actuaciones de comprobación e investigación de los hechos imposables, ejercer cuando proceda las facultades de inspección tributarias, imposición de sanciones por infracción tributaria, revisar de oficio los actos tributarios, acordar la devolución de ingresos indebidos, emitir los documentos de cobro, recaudar las deudas en período voluntario y ejecutivo, acordar la suspensión, aplazamiento y fraccionamiento de las deudas, notificar las resoluciones administrativas y prestar el servicio de información y asistencia general a los contribuyentes.

Artículo 77. El pago en período voluntario de las deudas derivadas de la liquidación periódica de los impuestos obligatorios, deberá realizarse en el plazo de cobranza que se acuerde, nunca inferior a dos meses y que deberá establecerse dentro de los siguientes períodos:

i. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales, entre los meses de marzo y agosto de cada año, ambos incluidos.

ii. Los Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Actividades Económicas, entre los meses de septiembre y diciembre de cada año, ambos incluidos.

La Presidencia del Organismo, por causas justificadas, podrá modificar los períodos de cobro señalados en los párrafos anteriores.

Artículo 78. Elaborados los padrones fiscales conteniendo las liquidaciones periódicas de los distintos impuestos obligatorios, serán sometidos a la aprobación de la Presidencia del Organismo que fijará el plazo de cobranza en período voluntario, y se notificarán colectivamente mediante edictos publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento afectado y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Organismo podrá divulgar los referidos edictos mediante la exposición en sus oficinas de atención al público, así como con la utilización de medios telemáticos.

El plazo de exposición pública de los padrones será al menos de un mes, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Del padrón fiscal, el Organismo Autónomo remitirá una copia en soporte informático al Ayuntamiento respectivo, junto con la acreditación del contraído formalizado en Contabilidad.

Sección II: Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Artículo 79. La gestión de este impuesto comprenderá, de una parte el ejercicio de las competencias tributarias delegadas por los Ayuntamientos de la provincia, y de otra, las competencias censales y de inspección que sobre estos mismos municipios hubiere cedido el Ministerio de Hacienda, a favor de la Diputación Provincial, bien en régimen de delegación de competencias o de prestación de servicios.

Artículo 80. El Organismo elaborará anualmente para cada municipio, los padrones fiscales comprensivos de las liquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto, de forma separada para los inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales, a partir de los correspondientes al ejercicio anterior, introduciendo las variaciones de orden físico, jurídico y económico que se hubieren aprobado mediante acuerdos adoptados por la Gerencia Territorial del Catastro, o en su caso por el propio Organismo en ejercicio de las competencias propias o asumidas por delegación del Ministerio de Hacienda. Así mismo, se incorporarán al padrón las correcciones por errores simples de datos en cuanto a identificación del sujeto pasivo y su domicilio fiscal que se hubieren solicitado por el mismo, o hubieren sido detectados en las depuraciones periódicas que se realizan de las bases de datos.

A efectos de la determinación de las cuotas que deben incluirse en el padrón cobratorio, se aplicarán sobre la base liquidable, los tipos impositivos y beneficios fiscales en vigor aprobados por los Ayuntamientos titulares del impuesto en su respectiva Ordenanza fiscal.

Artículo 80 (bis). Cuando la titularidad del derecho constitutivo del hecho imponible de este impuesto, pertenezca pro indiviso a una pluralidad de personas, de acuerdo con la información sobre titularidad catastral facilitada por la Dirección General del Catastro, con independencia de que la liquidación del impuesto deba practicarse a la comunidad constituida por ellas, podrá solicitarse la división de la cuota tributaria atendiendo a los porcentajes de participación de cada titular, mediante escrito en el que conste la identificación completa de todos los titulares, domicilio fiscal y porcentaje de participación de cada uno de ellos. A esta solicitud, deberá adjuntarse el documento público acreditativo de la titularidad y de los porcentajes de participación.

Practicada la primera liquidación con posterioridad a la solicitud de división de la cuota tributaria, se notificará individualmente a cada cotitular, expresando el porcentaje de participación que le corresponde y la cuota resultante de la división que deberá abonar como obligado al pago. Las liquidaciones sucesivas se notificarán de forma colectiva mediante el procedimiento establecido legalmente para las liquidaciones de ingreso periódico.

En el supuesto de impago de alguna de las cuotas en período voluntario, se iniciará la recaudación en período ejecutivo contra el cotitular que corresponda como obligado al pago de la misma.

No podrá solicitarse la división de la cuota tributaria en los casos de cotitularidad sujeta al régimen económico matrimonial de

sociedad de gananciales.

Por razones de eficacia, economía y racionalidad, no podrá aplicarse el procedimiento de división de la cuota tributaria cuando, como consecuencia de dicha actuación, resultaren cuotas de importe inferior a 6 euros para todos los cotitulares.

Artículo 81. En los casos de nueva construcción, así como cuando se produzcan alteraciones de orden físico, económico o jurídico en los inmuebles gravados, los sujetos pasivos estarán obligados a formalizar las correspondientes declaraciones de alta, baja o modificación de la descripción catastral en los impresos oficiales elaborados por la Dirección General del Catastro o por el propio Organismo, en la forma, plazos, modelos y condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda.

Las altas y alteraciones censales, causarán efectos tributarios en el período impositivo siguiente a aquél en que tuvieron lugar con independencia de la fecha de su incorporación al Catastro, procediendo liquidación directa o rectificación de las liquidaciones practicadas por los ejercicios no prescritos, una vez fijado y notificado el correspondiente valor catastral con sujeción a la ponencia de valores en vigor en el momento del alta o alteración.

En los supuestos de declaración por alteraciones censales que no produzcan modificación de la base imponible, podrá llevarse a cabo su incorporación al padrón correspondiente al ejercicio siguiente, sin que sea precisa notificación individual.

Artículo 82. El Organismo promoverá la coordinación necesaria, y en su caso, la formalización de los acuerdos de colaboración que se consideren necesarios con la Dirección General del Catastro, con el fin de facilitar el intercambio de información y favorecer una correcta gestión del impuesto.

En las oficinas de atención al público del Organismo se podrán facilitar consultas y certificaciones catastrales, a solicitud de los interesados, mediante la utilización de los Puntos de Información Catastral autorizados por la Dirección General del Catastro.

Sección III: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Artículo 83. El Organismo Autónomo elaborará anualmente para cada municipio, el padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, a partir del padrón del año anterior, con la incorporación de las altas, bajas y variaciones que se hubieren producido en los censos tributarios alimentados con las comunicaciones de la Dirección General de Tráfico sobre las alteraciones producidas en sus registros. A este fin, las bajas temporales por robo o sustracción del vehículo producirán idénticos efectos que las bajas definitivas. Así mismo, se incorporarán al padrón las correcciones por errores simples de datos en cuanto a identificación del sujeto pasivo y su domicilio fiscal que se hubieren solicitado por el mismo, o hubieren sido detectados en las depuraciones periódicas que se realizan de las bases de datos.

La cuota se determinará, mediante la aplicación del coeficiente de incremento sobre las tarifas establecidas legalmente y con los beneficios fiscales regulados en la correspondiente Ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento titular del tributo.

Artículo 84. En los supuestos de alta por primera adquisición del vehículo o rehabilitación del mismo, el impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, siendo exigible el ingreso como requisito necesario para la expedición del correspondiente permiso de circulación. Asimismo, cuando se produzca declaración por cambio de dominio, baja o variación del vehículo, el contribuyente podrá optar de forma potestativa por autoliquidar el impuesto, o esperar a que se gire la correspondiente liquidación periódica por el Organismo Autónomo.

Para facilitar la autoliquidación en los supuestos previstos, el Organismo elaborará los correspondientes impresos oficiales y

dispondrá un servicio de asistencia al contribuyente en sus oficinas de atención al público.

Artículo 85. Se considerará sujeto pasivo del impuesto, como titular del vehículo, la persona o entidad a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación, excepto en los supuestos de transmisión del vehículo, siempre que el cambio de titularidad se hubiere comunicado a la Jefatura Provincial de Tráfico con los requisitos previstos legalmente.

Artículo 86. Serán objeto de gravamen por este impuesto, la totalidad de los vehículos aptos para circular por las vías públicas, entendiéndose por tales, los que se encuentren matriculados en los registros de la Dirección General de Tráfico, incluidos los provistos de matrícula temporal o turística, y mientras no causen baja temporal por robo o sustracción, o definitiva en los referidos registros.

La anterior presunción, admitirá prueba en contrario.

Artículo 87. 1. Para la determinación del concepto de las diversas clases de vehículos, a efectos de la aplicación de las tarifas del impuesto, se estará a la regulación contenida en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

2. Respecto a la tributación de los vehículos clasificados como "vehículo mixto adaptable", se atenderá su característica predominante, transporte de personas o carga de mercancías, con el fin de determinar su clasificación como turismo o camión, a efectos de aplicación de las tarifas del impuesto.

En el supuesto de que el citado vehículo se destine con carácter estable al transporte simultáneo de carga y personas, se considerará como predominante el transporte de personas cuando el número de asientos instalados con carácter permanente exceda de la mitad de la capacidad potencial de asientos, o alternatively, cuando la capacidad de carga autorizada sea inferior o igual a 525 Kilogramos, procediendo en consecuencia su clasificación como turismo en el supuesto de que concorra cualquiera de estas circunstancias.

Artículo 88. Para facilitar la gestión del impuesto, el Organismo promoverá la coordinación y los acuerdos de colaboración que fueran necesarios con la Jefatura Provincial de Tráfico, orientados a la implantación de procedimientos informáticos y telemáticos para el intercambio de información. Así mismo, se favorecerá la formalización de acuerdos de colaboración social con el Colegio de Gestores Administrativos.

Sección IV: Impuesto sobre Actividades Económicas

Artículo 89. La gestión de este impuesto comprenderá, de una parte el ejercicio de las competencias tributarias delegadas por los Ayuntamientos de la provincia, y de otra, las competencias censales y de inspección que sobre estos mismos municipios hubiere delegado el Ministerio de Hacienda, a favor de la Diputación Provincial.

Artículo 90. En ejercicio de las competencias delegadas por el Ministerio de Hacienda, anualmente el Organismo elaborará para cada municipio la Matrícula del impuesto que estará constituida por los censos comprensivos de los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas gravadas por cuota municipal y no estén exentos del impuesto, clasificados por secciones, divisiones, agrupaciones, grupos y epígrafes.

La Matrícula se elaborará partiendo de la del ejercicio anterior, con la incorporación de las alteraciones que se hubieren producido como consecuencia de las actuaciones inspectoras o las declaraciones de alta, baja y variación censal presentadas hasta el día 31 de enero, siempre que se refieran a hechos producidos con anterioridad al día 1 de enero. Así mismo, se incorporarán a

la Matrícula las correcciones por errores simples de datos en cuanto a identificación del sujeto pasivo y su domicilio fiscal que se hubieren solicitado por el mismo, o hubieren sido detectados en las depuraciones periódicas que se realizan de las bases de datos.

La Matrícula se someterán a la aprobación de la Presidencia del Organismo u órgano en quien delegue, debiendo quedar a disposición del público desde el 1 al 15 de abril, en los respectivos Ayuntamientos y en las oficinas de atención al público del Organismo correspondientes a cada localidad, publicándose el correspondiente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, para los municipios de población superior a los 10.000 habitantes, cada Ayuntamiento deberá insertar anuncio en un periódico de los de mayor difusión en la provincia.

Artículo 91. Dentro del primer mes de cada trimestre natural, el Organismo remitirá a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las modificaciones que se hubiesen producido durante el trimestre inmediatamente anterior en los censos de actividades. Las modificaciones producidas durante el último trimestre de cada año natural, se remitirán antes del día 16 de febrero del año siguiente.

El Organismo promoverá los acuerdos necesarios con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para facilitar los intercambios de información utilizando procedimientos telemáticos.

Artículo 92. Anualmente, a partir de las matrículas aprobadas, el Organismo Autónomo elaborará los correspondientes padrones fiscales, que incluirán la liquidación correspondiente a cada actividad económica. Para la determinación de las cuotas tributarias, se aplicarán sobre las cuotas mínimas fijadas en las disposiciones vigentes, el coeficiente de ponderación legal y posteriormente los coeficientes de situación aprobados por los respectivos Ayuntamientos en sus Ordenanzas fiscales.

Artículo 93. Los sujetos pasivos que no estén exentos del impuesto, así como aquellos que estándolo deje de cumplirse las condiciones exigidas para su aplicación, estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones de alta en la matrícula en los plazos establecidos legalmente.

Los sujetos pasivos incluidos en la matrícula, estarán obligados a presentar declaración de baja en la actividad o las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en la misma, con sujeción a los plazos previstos legalmente.

El Organismo elaborará los impresos oficiales de declaración de acuerdo con el formato aprobado por el Ministerio de Hacienda y los pondrá a disposición de los interesados en las oficinas de atención al público abiertas en la provincia.

CAPÍTULO VII

Gestión de Tasas y Precios Públicos

Artículo 94. Las tasas y precios públicos establecidos por la Diputación provincial, se gestionarán y liquidarán por el Servicio de Hacienda en colaboración con los distintos departamentos, organismos y empresas que tuvieren encomendadas las actividades o servicios gravados, actuando de forma coordinada con el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

En los casos de liquidaciones de carácter periódico y notificación colectiva, la recaudación se llevará a cabo en todo caso, por el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, previa remisión del cargo correspondiente.

En los supuestos de autoliquidación y liquidación con ingreso directo, la recaudación se realizará con carácter general también por el Organismo Autónomo, no obstante, excepcionalmente, cuando razones de carácter operativo y de eficiencia lo justifiquen, podrá acordarse su recaudación directa por los propios ser-

vicios de la Diputación.

Artículo 95. En el caso de delegación de las facultades recaudadoras de otros entes en la Diputación provincial, corresponderá a cada Ayuntamiento o Entidad, la elaboración y aprobación de sus padrones cobratorios por tasas y precios públicos de vencimiento periódico, así como gestionar las liquidaciones directas que procedan por los referidos conceptos.

En el supuesto de delegación de las facultades recaudatorias en período voluntario de liquidaciones directas, la notificación de la liquidación se formalizará por el Organismo Autónomo simultáneamente con el requerimiento de pago.

Cuando se trate de liquidaciones de vencimiento periódico y notificación colectiva, el cargo deberá realizarse al Organismo en todo caso para la gestión del cobro en período voluntario. En el supuesto de liquidaciones directas, siempre que no se hubiera acordado la correspondiente delegación de competencias, la recaudación en período voluntario se llevará a cabo directamente por la propia entidad, realizándose el cargo al Organismo en período ejecutivo mediante la remisión de la oportuna certificación de descubierto.

Atendiendo a criterios de eficiencia y proporcionalidad en las actuaciones, la Tesorería del Organismo rechazará los cargos de deudas procedentes de otras entidades, exceptuando las autoliquidaciones, en los siguientes casos:

-Cargos en período voluntario: Cuando las deudas no superen 4 euros por principal. En el caso de que esté prevista la recaudación conjunta de varias deudas en un mismo abonaré, la cuantía mínima señalada se considerará de forma agrupada por documento de cobro.

-Cargos en período ejecutivo: Cuando las deudas no superen 6 euros por principal o cuando resten menos de seis meses para que se cumpla el plazo previsto para la prescripción de la acción administrativa para exigir el pago.

Artículo 96. En la elaboración de sus padrones cobratorios, los Ayuntamientos u otras entidades que hubieren delegado sus competencias recaudatorias, utilizarán necesariamente las aplicaciones informáticas facilitadas por EPRINSA para esta funcionalidad. Asimismo, seguirán las instrucciones impartidas por Hacienda Local relativas al correcto manejo de los aplicativos y los criterios fijados para la mecanización de los datos.

Elaborada la liquidación periódica y aprobada por el órgano competente, se generará el correspondiente fichero para su envío al Organismo siguiendo los procedimientos fijados para ello, junto con una certificación de la Secretaría municipal o de la entidad que se trate, sobre el acuerdo de aprobación del padrón, explicitando el concepto a que se refiere, ejercicio y período de liquidación, número de deudas practicadas e importe total.

El Organismo, podrá devolver al Ayuntamiento o entidad, los ficheros recibidos conteniendo la información sobre las liquidaciones aprobadas, para la subsanación de los defectos que se hubieren detectado en su tratamiento informático.

Artículo 97. Procesado por el Organismo el soporte conteniendo la liquidación periódica, se formalizará la correspondiente aceptación del cargo en la cuantía que se estime conforme por la Tesorería del Organismo, anotándose el correspondiente apunte de contraído en la Contabilidad. Al Ayuntamiento o entidad a que se refiera el cargo, se le remitirá comunicación del contraído en contabilidad con el justificante del cargo aceptado y rechazado.

Será competencia del Presidente del Organismo, la resolución que fija la apertura del período de cobranza y el plazo establecido para el ingreso voluntario de las deudas. Esta resolución, se notificará de forma colectiva mediante edictos en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia y exposición pública en los lugares destinados al efecto en las oficinas del Organismo y en los locales del Ayuntamiento o entidad afectada, con los requisitos establecidos legalmente para las deudas de vencimiento periódico. Dichos edictos podrán divulgarse mediante su publicación en la Sede electrónica del Organismo y en la de las entidades afectadas.

El plazo de exposición pública de los padrones será al menos de un mes, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 98. El Organismo Autónomo elaborará en coordinación con los Ayuntamientos u otras entidades que hubieren delegado sus facultades recaudatorias, un calendario de cobranza anual para las tasas y precios públicos. Este calendario, determinará los compromisos temporales para la aprobación y envío de los padrones cobratorios. En todo caso, los padrones deberán tener entrada en el Organismo para su procesado, al menos con una antelación de un mes sobre la fecha prevista para el inicio del período de cobranza.

Los padrones cobratorios que tengan su entrada en el Organismo con posterioridad al día 31 de octubre de cada año, serán considerados a todos los efectos cargo del ejercicio siguiente y causarán anotación de contraído en la Contabilidad a partir del día 1 de enero.

TÍTULO TERCERO

Inspección de Tributos y Potestad Sancionadora

Artículo 99. Las actuaciones y procedimientos de inspección tributaria en la Diputación provincial, se ejercerán en todo caso por los servicios del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

Artículo 100. La actuación inspectora se desarrollará con sujeción a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, así como las demás disposiciones que fueran de aplicación.

Para el ejercicio de las funciones inspectoras, el Servicio se adecuará a los correspondientes Planes Anuales de Inspección que periódicamente aprobará el Organismo.

Artículo 101. Antes de la finalización de cada año, a propuesta de la Gerencia del Organismo y previo informe de la Jefatura del Servicio de Gestión e Inspección Tributaria, el Consejo Rector del Organismo aprobará el Plan Anual de Inspección para el ejercicio siguiente.

Posteriormente, por decreto de la Presidencia del Organismo, se aprobará el listado específico de los hechos imponible a inspeccionar de acuerdo con las previsiones del Plan.

Artículo 102. En los supuestos de denuncia o descubrimiento de hechos imponible no declarados, se remitirá informe a la Gerencia del Organismo por la Jefatura del Servicio de Gestión e Inspección Tributaria sobre la procedencia de su inclusión en el Plan Anual de Inspección. La Gerencia elevará propuesta a la Presidencia del Organismo para su resolución, acompañando el referido informe.

El ejercicio de la actividad inspectora se realizará por personal funcionario dependiente del Organismo, correspondiendo en todos sus trámites a la Jefatura del Servicio de Gestión e Inspección Tributaria que ostentará la condición de Inspector Jefe de Tributos y con sometimiento a la dirección de la Gerencia.

Artículo 103. La Gerencia designará entre el personal del Organismo que no ostenta la condición de funcionario, aquellos trabajadores que habrán de desempeñar funciones de Agente Tributario, elevándose propuesta a la Presidencia para su nombramiento oficial.

Los Agentes Tributarios contarán con acreditación oficial del Servicio, y actuarán en los municipios donde la Diputación cuen-

te con competencias sobre gestión censal e inspección de tributos. El cometido de estos Agentes se concreta en la realización de actuaciones meramente preparatorias, de comprobación o prueba de hechos, o circunstancias con trascendencia tributaria, pudiendo acceder a los locales donde se desarrollen actividades abiertas al público, o a inmuebles cerrados siempre con el consentimiento de sus titulares. De sus actuaciones levantarán Diligencia de constancia de hechos, que en su caso podrá contar con la conformidad del contribuyente.

Las Diligencias levantadas por los Agentes Tributarios, se entregarán al Jefe de Inspección que decidirá sobre la tramitación a seguir y la procedencia del levantamiento de Acta de inspección en su caso.

Artículo 104. El Servicio de Gestión e Inspección Tributaria, elaborará en el primer trimestre de cada año, una Memoria comprensiva de las actuaciones inspectoras desarrolladas en el año anterior, con información estadística para cada municipio.

Artículo 105. En materia de tributos locales se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

TÍTULO CUARTO

Recaudación

CAPÍTULO I

Gestión Recaudatoria y Órgano de Recaudación

Artículo 106. La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de Derecho público a favor de la Diputación Provincial de Córdoba y de las Administraciones públicas integradas en su territorio que hayan acordado la delegación de sus competencias.

En aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y racionalidad, que deben presidir todas las actuaciones administrativas, incluidas las recaudatorias, el Organismo no realizará actuaciones de comunicación en papel impreso dirigidas a facilitar la realización del pago en período voluntario de las deudas de ingreso periódico, cuando el importe a ingresar agrupado por abonaré/expediente no exceda de 4 euros En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, para determinar el importe señalado, se atenderá a la totalidad de la cuota agrupada de los bienes de un mismo sujeto pasivo.

Artículo 107. La gestión recaudatoria se realizará en dos períodos:

a) En período voluntario, los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos señalados al efecto.

b) En período ejecutivo, la recaudación se efectuará coercitivamente, por vía de apremio sobre el patrimonio del obligado que no haya cumplido la obligación a su cargo en período voluntario.

Artículo 108. La gestión recaudatoria que la legislación atribuye a la Diputación Provincial de Córdoba, se llevará a cabo de forma directa tanto en período voluntario como ejecutivo, correspondiendo su ejercicio al Organismo Autónomo administrativo "Instituto de la Cooperación con la Hacienda Local", sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ordenanza General.

Artículo 109. En relación con la recaudación de los créditos tributarios y demás de Derecho público a que se refiere la presente Ordenanza, la competencia para evacuar las consultas a que se refiere el artículo 88 de la Ley General Tributaria, corresponderá a la Presidencia del Organismo Autónomo.

Artículo 110. La gestión recaudatoria desarrollada por el Organismo, se organiza bajo la dirección de la Gerencia, correspondiendo la responsabilidad inmediata de su ejercicio al Tesorero del Organismo como Jefe de los Servicios Recaudatorios y con

sometimiento al control y fiscalización de la Intervención.

Serán funciones reservadas al Tesorero, las comprendidas en el artículo 5.3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre y las que expresamente se recogen en la presente Ordenanza.

CAPÍTULO II

Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial

Artículo 111. Para el cobro de las deudas, el Organismo Autónomo podrá operar mediante Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial, previa concesión de la correspondiente autorización a las Entidades Bancarias, Cajas de Ahorro Confederadas y Cooperativas de Crédito calificadas que lo soliciten. Para tales efectos, se acordará la apertura de cuentas restringidas de recaudación con la denominación "Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Cuenta restringida para la recaudación de ingresos públicos". Otorgada la autorización, se entenderá concedida a todas las sucursales de una misma Entidad.

Por el Consejo Rector del Organismo, se regularán las normas de aplicación al funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial.

Será competencia de la Presidencia del Organismo, previo informe de la Gerencia, la concesión o cancelación de autorizaciones para operar como Entidad Colaboradora de la Recaudación Provincial. En ningún caso, las Entidades autorizadas para ejercer estas funciones de colaboración tendrán el carácter de órganos de recaudación.

Así mismo, la Presidencia podrá convenir la prestación del servicio de caja del Organismo.

Artículo 112. El incumplimiento por parte de las Entidades Colaboradoras de las obligaciones establecidas en sus normas de aplicación, conllevará la apertura de expediente con posibilidad de imposición de las siguientes sanciones:

- a) Suspensión temporal de la autorización otorgada a la entidad para todas o alguna de sus oficinas.
- b) Revocación definitiva de la autorización otorgada a la entidad.
- c) Restricción temporal del ámbito territorial de su actuación.
- d) Restricción definitiva del ámbito territorial de su actuación.
- e) Exclusión de la prestación del servicio de colaboración a alguna de las oficinas.

El procedimiento sancionador se iniciará mediante acuerdo de la Gerencia previo informe de la Tesorería del Organismo que actuará como instructor del expediente. Formulada propuesta de resolución por la Tesorería con el conforme de la Gerencia, se procederá a su notificación a la entidad, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y la concesión de un plazo de 15 días para alegaciones.

La resolución del expediente sancionador será competencia de la Presidencia del Organismo.

Artículo 113. Las Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial, deberán transferir el día hábil siguiente a los días 5 y 20 de cada mes, el importe de la recaudación de la quincena anterior, a la cuenta ordinaria que el Organismo mantendrá en la Entidad Centralizadora de Ingresos que previamente se habrá seleccionado.

CAPÍTULO III

Notificación de las liquidaciones y clasificación de las deudas

Artículo 114. Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo, constituye a éste en la obligación de satisfacer la deuda.

Las deudas tributarias y no tributarias en atención a la liquidación de la que proceden, se clasificarán a efectos recaudatorios en:

a. Deudas liquidadas individualmente: Requieren la notificación de la liquidación de forma directa al deudor, con los requisitos establecidos en la Ley General Tributaria. Sin la notificación en forma legal, la deuda no será exigible.

b. Deudas de liquidación colectiva: Son aquellas deudas que por derivar directamente de censos, padrones o matrículas ya conocidos, las liquidaciones periódicas posteriores a la correspondiente al alta en los mismos, se notificarán mediante edictos que así lo adviertan.

c. Deudas autoliquidadas: Son aquellas en las que el deudor, por medio de efectos timbrados o a través de declaraciones-liquidaciones, procede al pago simultáneo de la deuda.

Artículo 115. En el caso de deudas de carácter periódico, no se precisará la notificación individual de la liquidación aunque la deuda varíe periódicamente como consecuencia de revalorizaciones en la base imponible autorizadas con carácter general por las leyes, o modificaciones en el tipo o la base de cálculo establecidas en la respectiva Ordenanza fiscal aprobada según la normativa vigente.

Artículo 116. En los supuestos de deudas liquidadas de forma colectiva, simultáneamente con la notificación de la liquidación se expondrá al público el censo o padrón y se anunciará el período de cobranza.

Estas actuaciones se llevarán a cabo mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la provincia, en las oficinas del Organismo que corresponda y en los locales de los Ayuntamientos afectados. Dichos edictos podrán divulgarse por los medios de comunicación que se consideren adecuados.

El anuncio de cobranza deberá contener los requisitos previstos en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, pudiendo ser sustituido por notificaciones individuales.

CAPÍTULO IV

El pago de las deudas

Artículo 117. 1. Con sujeción a la legislación vigente, los contribuyentes dispondrán como mínimo de los siguientes plazos para el pago de las deudas:

A) Deudas tributarias resultantes de liquidaciones individuales:

1. Las notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2. Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

B) Las deudas no tributarias resultantes de liquidaciones individuales, deberán pagarse en los plazos que determinen las normas, con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de los plazos, se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior.

C) Las deudas tributarias que deban ingresarse mediante declaración-liquidación, o autoliquidación, deberán satisfacerse en los plazos o fechas que señalan las normas reguladoras de cada tributo.

D) Las deudas tributarias y no tributarias de carácter periódico cuya liquidación se notifique de forma colectiva, deberán abonarse en el plazo mínimo de dos meses, contados a partir de la fecha de aparición en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de apertura del respectivo periodo de cobranza.

2. La Presidencia, acordará mediante resolución el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias y no tributarias con sujeción a los plazos mínimos establecidos.

3. Cuando los contribuyentes utilicen como medio para realizar

el pago, los procedimientos telemáticos dispuestos por el Organismo, se entenderá prorrogado automáticamente el plazo fijado para el ingreso de las deudas por el tiempo que fuera indispensable para la tramitación de la orden de pago ante la Entidad Colaboradora de la Recaudación Provincial, siempre que la referida orden de pago se hubiere efectuado dentro del plazo señalado en la correspondiente resolución.

Artículo 118. Todas las deudas tributarias y no tributarias cuya gestión recaudatoria sea llevada a cabo por el Organismo, se ingresarán generalmente a través de Entidades de depósito autorizadas para colaborar en la recaudación provincial. En estos supuestos, el Organismo facilitará directamente en sus oficinas o remitirá al domicilio de los obligados al pago, los correspondientes abonares representativos de las deudas que, necesariamente, deberán ser presentados ante la Entidad Colaboradora para efectuar el ingreso, dentro del plazo fijado para su vencimiento.

En los casos de pérdida, destrucción o falta de recepción del abonaré, el interesado podrá dirigirse a los diferentes puntos de información dispuestos por el Organismo, donde se le facilitará el correspondiente duplicado.

La recaudación mediante abonares, no supondrá en ningún caso, alteración del procedimiento de notificación previsto legalmente para las deudas de vencimiento periódico.

Artículo 119. Salvaguardando en todo caso los plazos mínimos establecidos para el pago de las deudas, la Presidencia del Organismo regulará mediante decreto los plazos de ingreso aprobando los criterios para el vencimiento de los abonares, con la finalidad de armonizar la operatoria de esta modalidad de recaudación y las necesarias exigencias de control y casamiento de los ingresos recaudados.

Artículo 120. Las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, podrán domiciliarse para su pago en cuentas abiertas en Entidades de depósito. Para ello, los deudores se dirigirán a cualquiera de las oficinas abiertas al público por el Organismo o utilizarán la conexión telemática establecida al efecto y cumplimentarán la solicitud correspondiente, con anticipación al comienzo del periodo recaudatorio. En otro caso, surtirán efectos a partir del periodo siguiente.

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la entidad de depósito o el Organismo disponga expresamente y de forma justificada su invalidez. En este último supuesto, cuando el acuerdo que declara la invalidez de las domiciliaciones tenga carácter general, deberá hacerse público con las mismas formalidades que el anuncio de cobranza.

Sin perjuicio de lo anterior, los deudores también podrán domiciliar las deudas futuras por intermediación de la entidad bancaria de su elección, siempre y cuando esta entidad, tenga implementado el procedimiento de intercambio de ficheros electrónico, establecido a estos efectos por el Organismo. En este caso, la entidad de depósito asume la responsabilidad ante el cliente de la tramitación dada a su orden de domiciliación, no siendo exigible ante la Administración sin la acreditación necesaria de su comunicación previa, conforme al procedimiento establecido y los plazos señalados en el párrafo primero.

Artículo 121. El pago de las deudas tributarias y no tributarias habrá de realizarse en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados, según dispongan las normas que las regulen.

A falta de disposición expresa, el pago habrá de realizarse siempre en efectivo.

Artículo 122. Las deudas que deban satisfacerse mediante efectos timbrados, se pagarán en el momento de la realización

del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su regulación especial.

El empleo, forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características de los efectos timbrados, se regirán por las normas que regulan los tributos y demás recursos de derecho público que admiten dicho medio de pago y por las normas del Reglamento General de Recaudación vigente.

Artículo 123. 1. El pago de las deudas tributarias y no tributarias que deba realizarse en efectivo, se hará por alguno de los siguientes medios:

- a) Dinero de curso legal.
- b) Cheque.
- c) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.
- d) Cualquier otro medio de pago que autorice expresamente la Presidencia del Organismo.

El dinero de curso legal se admitirá en todo caso, incluso cuando el deudor no tenga cuenta abierta en la Entidad Colaboradora de que se trate.

2. Los pagos que deban efectuarse directamente en el Servicio de Caja, podrán efectuarse mediante cheque, que deberá reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:

- a) Ser nominativo a favor del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.
- b) El nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
- c) Estar conformado o certificado por la entidad librada.

Cuando un cheque no sea hecho efectivo en todo o en parte, una vez transcurrido el periodo voluntario, se incluirá en la relación de descubierto la parte no pagada para su cobro por vía de apremio. Si el cheque estaba válidamente conformado o certificado, le será exigido a la Entidad que lo conformó o certificó, en otro caso, le será exigido al deudor.

3. Para el supuesto de pago en Entidad Colaboradora o prestadora del Servicio de Caja, ésta podrá admitir bajo su responsabilidad cualquier medio de pago.

4. Cuando el pago se realice mediante transferencia, se entenderá como fecha del mismo la de su ingreso en cuenta de la Administración.

Artículo 124. 1. El que pague una deuda conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza, tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago realizado.

2. Los justificantes del pago en efectivo, que acreditan a su poseedor como pagador de la deuda serán, según los casos:

- a) Las cartas de pago expedidas por órganos competentes o por Entidades autorizadas para recibir el pago.
- b) El adeudo de la Entidad de depósito en los pagos realizados mediante domiciliación bancaria, banca electrónica y Cajero automático.
- c) El certificado electrónico emitido por el Organismo como justificante en los pagos realizados mediante la utilización de procedimientos telemáticos.

3. No obstante lo anterior, también tendrán el carácter de justificantes del pago de las deudas, aunque no podrán servir para acreditar la personalidad del pagador, los certificados del ingreso efectuado expedidos por las oficinas de atención al público del Organismo Autónomo, obtenidos mediante procesos de consulta a las bases de datos informatizadas.

4. Cuando se empleen efectos timbrados, los propios efectos, debidamente inutilizados, constituyen el justificante de pago.

5. Los justificantes expedidos por las Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial, con los requisitos estipulados en

sus normas de funcionamiento, surtirán para los obligados al pago los mismos efectos que si el ingreso se hubiera realizado en la Caja del Organismo y, en consecuencia, quedarán liberados para con la Tesorería en la fecha de ingreso que se consigne en aquellos y por el importe figurado en los mismos.

Artículo 125. El cobro de un débito de vencimiento posterior no presupone el pago de los anteriores, ni extingue el derecho de la Administración a percibir aquellos que estén en descubierto, sin perjuicio de los efectos de la prescripción.

Artículo 126. 1. Las deudas se presumen autónomas. El deudor de varias deudas podrá, en periodo voluntario, imputar el pago a aquella o aquellas que libremente determine.

2. No obstante lo anterior, si durante el procedimiento ejecutivo se hubieran acumulado varias deudas de un mismo deudor y no pudieran satisfacerse en su integridad, sin perjuicio de las normas que establecen la prelación de créditos, el pago se aplicará a las deudas por orden de mayor a menor antigüedad, determinada esta por la fecha de vencimiento del periodo voluntario para el pago de cada una.

Artículo 127. Las deudas no satisfechas en los plazos establecidos, se exigirán en vía de apremio de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación vigente, computándose como ingresos a cuenta las cantidades pagadas fuera del plazo de ingreso voluntario.

CAPÍTULO V

Aplazamiento y fraccionamiento del pago

Artículo 128. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de todas las deudas tributarias y no tributarias cuya gestión recaudatoria esté encomendada al Organismo, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, previa petición de los obligados, cuando la situación de su tesorería, discrecionalmente apreciada por la Administración, les impida efectuar transitoriamente el pago de sus débitos.

Para el fraccionamiento de deudas en periodo voluntario, será requisito indispensable que el contribuyente se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales con el Organismo, o en caso contrario, la solicitud de fraccionamiento deberá incluir el conjunto de la deuda existente en periodo ejecutivo.

No serán aplazables las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados, o aquellas cuya cuantía no supere los 100 € de principal y se encuentren pendientes de cobro en periodo ejecutivo.

No se admitirá la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con exención de garantía que resulte reiterativa respecto a deudas que anteriormente ya hubieran sido aplazadas o fraccionadas con incumplimiento de los plazos de cobro.

En el supuesto de que se hubiere incumplido el pago del aplazamiento o fraccionamiento concedido en periodo ejecutivo, y cuando la garantía aportada no consista en aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, podrá concederse un nuevo aplazamiento o fraccionamiento a solicitud del obligado al pago, previo ingreso de los importes vencidos y no atendidos o alternativamente del veinte por ciento del total de la deuda.

Artículo 129. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, se presentarán en las oficinas abiertas al público o en la Sede electrónica del Organismo, siempre que el procedimiento se encuentre habilitado por este medio, en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes embarcados.

La solicitud se formalizará preferentemente en el modelo impreso elaborado por la Administración, haciendo constar en cual-

quier caso, la identificación de las deudas a aplazar o fraccionar, el plazo solicitado o número de fraccionamientos, así como la garantía ofrecida y la cuenta bancaria donde se desea domiciliar los pagos.

La presentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, conllevará la suspensión cautelar de las actuaciones tendientes a la ejecución de bienes, no obstante, cuando junto a la solicitud no se aportare garantía suficiente, se continuarán los trámites para la traba de bienes con el fin de asegurar el cobro de la deuda.

En los casos de solicitud de exención total o parcial de garantía, con independencia de la documentación que se considere necesario requerir por la Tesorería acreditativa de la situación patrimonial del solicitante, el peticionario deberá presentar, cuando se trate de persona física, declaración responsable manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía, copia de la última nómina o en su caso acreditación de la situación de desempleo o jubilación, así como cualquier otro documento que estime oportuno en apoyo de su petición. En el caso de personas jurídicas, deberá presentar además de los documentos anteriores, justificación sobre la imposibilidad de obtener aval en al menos dos entidades de crédito y la documentación contable sobre la empresa que le fuera requerida por la Tesorería.

El procedimiento de ingreso para los aplazamientos y fraccionamientos, será obligatoriamente la domiciliación en cuenta abierta en alguna entidad de depósito, para lo cual el interesado deberá indicar los datos identificativos de la entidad bancaria y la cuenta, de acuerdo con el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN).

Artículo 130. 1. Por una sola vez y a solicitud del deudor, se concederá automáticamente el fraccionamiento de la deuda sin necesidad de resolución previa y sin exigencia de garantía, para aquellas deudas cuya cuantía total, en concepto de principal, no exceda de 5.000 €, por un período máximo de 24 meses, debiendo resultar en todo caso una cuantía mensual mínima a pagar de 60 € más los intereses correspondientes. No obstante lo anterior, cuando en el momento de la concesión del fraccionamiento se hubiera realizado traba de bienes en el procedimiento ejecutivo, dicha traba se mantendrá como garantía del fraccionamiento salvo que se aporte otra garantía alternativa que se considere suficiente.

2. También se concederá de forma automática y sin exigir intereses, el fraccionamiento de los impuestos obligatorios con vencimiento periódico y notificación colectiva, siempre que se solicite en periodo voluntario y que el pago total se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo. En este caso, la cuota mensual no podrá resultar inferior a 30 €.

3. En relación con los procedimientos de actuación automatizada previstos en los apartados anteriores y en el artículo 134, se determinan las siguientes competencias:

a) Corresponderá a la Empresa Provincial de Informática (EPRINSA) la programación y mantenimiento de la aplicación informática empleada para la gestión del procedimiento, así como la auditoría del sistema de información y de su código fuente.

b) Será competencia de la Tesorería la supervisión y control de calidad del correcto funcionamiento de los programas informáticos empleados.

c) En caso de impugnación de las actuaciones automatizadas, será competente la Gerencia del Organismo para su resolución.

4. Excepcionalmente para las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, por el concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y la Tasa provincial por la

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, siempre que el importe acumulado de las mismas alcance 60 euros por entidad y concepto y se encontraren domiciliadas, se tramitará el cobro en dos plazos fraccionados por un importe del 50 por 100 de la deuda sin repercusión de intereses para cada una de las fracciones, con una demora mínima de cuatro meses entre los pagos y sin necesidad de solicitud previa del deudor. No obstante lo anterior, el interesado podrá solicitar el fraccionamiento de la deuda en otros plazos distintos de acuerdo con lo regulado en apartado 2 de este artículo.

5. En el supuesto de deudas fraccionadas en período voluntario con sujeción a los procedimientos previstos en los apartados 2 y 4 de este artículo, el rechazo por parte de la entidad de depósito de cualquiera de las fracciones domiciliadas, conllevará la anulación del fraccionamiento y el pase a ejecutiva del pendiente de cobro total de la deuda, siempre que se hubiere cumplido el plazo establecido para el pago en período voluntario establecido en el correspondiente anuncio de cobranza.

Artículo 131. Cuando la deuda en concepto de principal exceda de 5.000 €, la garantía exigible para la concesión de aplazamientos o fraccionamientos, será la siguiente:

-Hasta un importe de 10.000 €, se admitirá como garantía suficiente, el aval personal y solidario de un contribuyente con solvencia justificada.

-Para deudas cuya cuantía supere las 10.000 €, con carácter general se exigirá como garantía aval o compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o certificado o compromiso de certificado de seguro de caución, con los requisitos que se determinen por la Tesorería del Organismo.

-Excepcionalmente, a propuesta de la Tesorería, podrá aceptarse otra garantía que se considere suficiente.

Artículo 132. 1. Atendiendo al importe del principal de la deuda, la temporalidad de los aplazamientos o fraccionamientos podrá ser la siguiente:

a. Las deudas cuyo importe no supere los 5.000 €, podrá aplazarse o fraccionarse como máximo 24 meses.

b. El pago de las deudas cuyo importe esté comprendido entre más de 5.000 y 10.000 €, podrá ser aplazado o fraccionado hasta 30 meses.

c. Cuando el importe de la deuda supere 10.000 €, podrá ser aplazado o fraccionado hasta un máximo de 36 meses.

2. El fraccionamiento de la deuda no podrá dar lugar a cuotas mensuales inferiores a 60 €, exceptuado el supuesto previsto en el artículo 130.2. No obstante, atendiendo a circunstancias excepcionales de naturaleza económica en el solicitante, justificadas en el expediente, la Tesorería podrá proponer cuotas mensuales inferiores hasta un mínimo de 25 € y la correspondiente ampliación del plazo de fraccionamiento hasta el 75 por 100 del máximo previsto con carácter ordinario en este artículo.

En ningún caso las deudas podrán aplazarse por un período superior al máximo que pudiera aplicarse en caso de fraccionamiento.

Considerando la especial situación derivada de la aplicación del procedimiento de regularización catastral, regulado en la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo y, atendiendo al importante número de contribuyentes afectados así como a la importancia de las cuotas a ingresar correspondientes a varios ejercicios, previa valoración de las circunstancias económicas personales del solicitante para afrontar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la Tesorería podrá proponer el fraccionamiento de esta deuda hasta en un plazo má-

ximo de 48 meses, con un importe mínimo de 25 euros por mes.

3. Con carácter extraordinario, cuando el deudor y las personas que conviven con él se encontraren en situación de desempleo y/o con escasez manifiesta de recursos económicos para hacer frente al pago de la deuda y cuyo único patrimonio embargable consista en la vivienda habitual y el ajuar de la misma indispensable para vivir dignamente, todo ello acreditado mediante el correspondiente informe de los servicios sociales existentes en el municipio, una vez dictada diligencia de embargo y realizada la correspondiente anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a solicitud del interesado podrá concederse un aplazamiento especial de la deuda por el plazo de 1 año, prorrogable por otros dos más, antes de iniciar el procedimiento de ejecución del inmueble.

4. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido el recargo de apremio, devengarán el interés de demora correspondiente, según se trate de deudas tributarias o no tributarias.

Artículo 133. Será órgano competente para conceder los aplazamientos o fraccionamientos no automáticos, el Presidente del Organismo Autónomo, a propuesta de la Gerencia, previo informe de la Tesorería.

Artículo 134. Los contribuyentes podrán acogerse previa solicitud, a un sistema de pago personalizado para las deudas de ingreso periódico por recibo, correspondientes a todo el ejercicio, mediante la periodificación de los pagos a su elección en cuotas mensuales, bimestrales o trimestrales, con sujeción a las siguientes condiciones:

a) La solicitud con aceptación expresa de las condiciones reguladas para este procedimiento de cobro, deberá formalizarse necesariamente mediante personación en cualquiera de las oficinas abiertas al público por el Organismo en la provincia, o alternatively, a través de la Sede electrónica cuando se encuentre disponible este procedimiento por dicho medio. La solicitud podrá formalizarse durante el ejercicio anterior, o en el primer trimestre del ejercicio en que se pretenda aplicar la periodificación de pagos, debiendo concretar la periodificación por la que se opta, hasta un máximo de 12 mensualidades o las que resten en su caso para la finalización del ejercicio en el momento de la solicitud, considerando que la cuota mínima de pago no podrá ser inferior a 15 euros. La periodificación de pagos solicitada se concederá de forma automatizada sin resolución, previa verificación por el sistema informático del cumplimiento de las condiciones reguladas para su aplicación. Una vez aprobada la aplicación de este sistema de pago, tendrá vigencia indefinida hasta la renuncia manifestada de forma expresa por el contribuyente, o bien, cuando concurre alguno de los supuestos regulados que conlleva su anulación.

b) El sistema de pago periodificado de deudas, en ningún caso afectará a las liquidaciones de ingreso directo que pudieran aprobarse como consecuencia de los distintos procedimientos de gestión e inspección tributarios. Estas liquidaciones deberán ingresarse en los plazos regulados legalmente atendiendo a su fecha de notificación, sin perjuicio de que pueda solicitarse el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda por el procedimiento ordinario.

c) Será requisito indispensable para la concesión o el mantenimiento del sistema de pago periodificado, que el contribuyente se encuentre al corriente en el pago de sus deudas ante el Organismo.

d) La cuota periódica a ingresar en cada ejercicio se estimará atendiendo a la periodificación de ingresos solicitada y a la deuda total liquidada en el ejercicio anterior al de su aplicación, actualizada con la situación censal del contribuyente a 31 de diciem-

bre. Esta cuota periódica estimada inicialmente, se recalculará de forma automática en el supuesto de que la deuda real liquidada a una determinada fecha suponga una alteración superior a 10 euros, en más o menos sobre la estimada. En todo caso la última cuota referida al mes de diciembre, se determinará con la cuantía necesaria para regularizar el importe pendiente de pago que resta, de las deudas por ingreso periódico liquidadas en el ejercicio. En el caso de que la cuota de regularización correspondiente al mes de diciembre resultara negativa, la cuantía ingresada en exceso se descontará del importe a ingresar en los plazos del ejercicio siguiente, no obstante, cuando esto no fuera posible por algún motivo, o bien lo solicitara así el contribuyente, se procederá a la devolución inmediata de la cantidad mediante transferencia a la cuenta corriente señalada para la domiciliación siempre que no se hubiera indicado otra distinta, sin que proceda en estos supuestos la reclamación de intereses de demora.

e) El cobro de las cuotas periódicas se realizará en los 5 primeros días del mes correspondiente, mediante cargo a la cuenta de domiciliación que obligatoriamente deberá haber indicado el contribuyente en su solicitud. El impago de alguna de las cuotas periódicas mediante el rechazo de la entidad bancaria donde se encuentren domiciliadas, implicará automáticamente la cancelación del sistema de pago periodificado de deudas, sin necesidad de resolución expresa.

f) Los ingresos periódicos tendrán la consideración de ingresos a cuenta de las liquidaciones a practicar durante el ejercicio, imputándose a cada liquidación por orden de antigüedad, atendiendo a la fecha de aprobación, una vez se alcance la cuantía suficiente para su cancelación.

g) En caso de renuncia expresa del contribuyente o cancelación por otros motivos del sistema de pago periodificado de deudas, los ingresos realizados hasta ese momento se imputarán a las deudas liquidadas, continuándose la gestión de cobro por el procedimiento ordinario. En el supuesto de que alguna deuda se encontrara pendiente de pago habiendo vencido el período voluntario de cobro, se iniciará la gestión recaudatoria por el procedimiento de apremio.

h) El contribuyente recibirá comunicación respecto a las siguientes actuaciones durante el procedimiento:

a. Justificante del sistema de periodificación de pagos a aplicar resultante de su solicitud.

b. Copia de cada liquidación periódica practicada, indicando su inclusión en el sistema de pago periodificado.

c. La cancelación, cuando proceda, del sistema de pago periodificado de deudas, indicando la aplicación de los ingresos realizados si los hubiere y la situación de las deudas liquidadas hasta ese momento.

d. Liquidación definitiva del sistema de cobro aplicado durante el ejercicio, con determinación de la cuota final de regularización a aplicar en el mes de diciembre.

Artículo 135. 1. Las normas del presente Capítulo, podrán ser desarrolladas mediante instrucción de la Presidencia del Organismo.

2. En todo caso, se estará supletoriamente a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones concordantes y complementarias.

3. La concesión de moratorias sobre el pago de las deudas, estén o no liquidadas, solamente podrá otorgarse por Ley, con el alcance que esta misma precise.

CAPÍTULO VI

Otras formas de extinción de las deudas

Artículo 136. Prescripción

1. La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario.

2. El plazo de prescripción de las deudas no tributarias se regirá por lo que dispongan las leyes con arreglo a las cuales se determinaron y, en defecto de éstas, la Ley General Presupuestaria.

3. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado al pago.

4. Periódicamente, al menos una vez por año, el Organismo elaborará una propuesta colectiva para declarar la prescripción de oficio de todas aquellas deudas en que concurren las circunstancias previstas por las disposiciones vigentes. Esta propuesta será sometida a la aprobación de la Presidencia, previa fiscalización de la Intervención de acuerdo con los criterios que se fijen en la bases de ejecución del presupuesto.

5. Las deudas declaradas prescritas serán dadas de baja en cuentas.

6. El plazo de prescripción se interrumpirá en los supuestos previstos legalmente.

7. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago.

Artículo 137. Compensación

En los casos y con los requisitos que se establecen en la legislación de Régimen Local, Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas a favor del Organismo que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto en voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos a favor del deudor.

Cuando se ejerzan las funciones recaudatorias por delegación de otros entes, la entidad titular de los derechos podrá acordar la compensación de deudas por su importe íntegro cuando se encuentren en voluntaria y por cualquier importe cuando se encuentren en ejecutiva. Comunicado el acuerdo de compensación, el Organismo practicará la correspondiente deducción en la próxima liquidación mensual, datando posteriormente el ingreso aplicado.

Artículo 138. Condonación

Las deudas solo podrán ser objeto de condonación, en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.

CAPÍTULO VII

Procedimiento de apremio

Artículo 139. 1. La falta de pago en los plazos y con los requisitos exigidos durante el período voluntario, iniciará el período ejecutivo, efectuándose la recaudación de las deudas a través del procedimiento administrativo de apremio sobre el patrimonio del deudor.

2. La deuda en descubierto se incrementará con el recargo de apremio, intereses de demora y costas que en cada caso sean exigibles, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

3. Los intereses de demora devengados por las deudas en descubierto, se exigirán en todo caso con independencia de la cuantía que representen.

4. Tendrán la consideración de costas del procedimiento, entre otros, los gastos originados por la realización de las notificaciones administrativas.

Artículo 140. 1. El procedimiento de apremio será exclusivamente administrativo, siendo privativa de la Administración la competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias. No será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. No se suspenderá por la iniciación de

aquellos, salvo cuando proceda de acuerdo con las normas sobre concurrencia de procedimientos.

2. El procedimiento de apremio se inicia e impulsa de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la legislación vigente.

Artículo 141. El ejercicio de las distintas actuaciones necesarias durante el procedimiento recaudatorio, se atribuye con arreglo al siguiente régimen de competencias:

a) Competencias que corresponderán al Consejo Rector del Organismo:

i. Plantear previo informe del Servicio Jurídico, conflictos jurisdiccionales ante los jueces y tribunales cuando proceda durante la tramitación del procedimiento de apremio.

ii. La autorización para suscribir acuerdos o convenios en procesos concursales cuando incluyan quitas y esperas.

b) Competencias atribuidas a la Presidencia del Organismo u órgano en quien delegue:

-Plantear tercerías de mejor derecho a favor de la Hacienda local, a propuesta de la Gerencia del Organismo.

-Concesión de aplazamientos y fraccionamientos en los términos regulados en la presente Ordenanza.

-Aprobar los expedientes individuales o colectivos sobre declaración de prescripción, previa fiscalización de la Intervención.

-Acordar la autorización, suspensión o cancelación, a las Entidades de depósito para operar como Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial, a propuesta de la Gerencia.

-Acordar con sujeción a lo dispuesto en la presente Ordenanza, la fijación de los plazos de ingreso en período voluntario de las deudas.

-Publicar los anuncios de cobranza de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.

-Acordar previo informe de los Servicios Jurídicos, la exigencia de responsabilidad civil o penal, cuando existan indicios de simulación de cargas preferentes sobre bienes embargados que impidan o dificulten la efectividad de los débitos.

-Dictar instrucciones interpretativas de las normas aplicables en cada caso.

-Resolver las reclamaciones de tercería de dominio presentadas por los interesados, previo informe de los Servicios Jurídicos.

-Acordar la declaración de fallidos de los deudores principales y de los responsables solidarios, en los casos que proceda reglamentariamente, previo informe de la Tesorería y la fiscalización de Intervención.

-Las que se le asignan en otros apartados de la presente Ordenanza, y cualquier otra que no esté atribuida legal o reglamentariamente a otro órgano.

c). Competencias atribuidas a la Gerencia del Organismo:

1. Aceptar o exigir la constitución de hipoteca especial, previo informe de la Tesorería, en garantía de los créditos de la Hacienda local.

2. Acordar la adopción de las medidas previstas en el artículo 90.6 del Reglamento General de Recaudación, en relación con la ejecución del embargo en establecimientos mercantiles e industriales, previo informe de la Tesorería.

3. Declarar previo informe de la Tesorería, la responsabilidad solidaria del depositario por levantamiento de bienes embargados.

4. Nombrar depositario de los bienes embargados cuando sus funciones impliquen actos que excedan de la mera custodia, conservación y devolución, previo informe del Tesorero.

5. Autorizar la celebración de subastas a través de empresas o profesionales especializados a propuesta del Tesorero.

6. Acordar cuando proceda, a propuesta de la Tesorería la enajenación de los bienes embargados por el procedimiento de concurso.

7. Acordar cuando proceda, a propuesta de la Tesorería, la venta de los bienes embargados mediante adjudicación directa y su resolución en los supuestos previstos en el artículo 107.1 b) y c) del Reglamento General de Recaudación.

8. Solicitar la protección y el auxilio de las autoridades de orden público cuando lo requiera el ejercicio de la actividad recaudatoria.

9. Solicitar al Juez cuando corresponda, la autorización para la entrada en el domicilio de los deudores.

10. Dictar los actos administrativos de derivación de responsabilidad en todos los supuestos en que legalmente proceda, previo informe del Tesorero.

11. Las demás que expresamente le estén atribuidas en el articulado de esta Ordenanza General.

d) Competencias cuyo ejercicio corresponderá al Tesorero del Organismo:

A) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.

B) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter, y resolver los recursos de reposición que pudieran plantearse contra la misma.

C) Acordar la enajenación mediante subasta de los bienes embargados, fijando día, hora y local en que deba celebrarse, así como el tipo de subasta para licitar.

D) Presidir la Mesa de subasta y realizar cuantas actuaciones le correspondan reglamentariamente.

E) Elevar propuesta razonada de adjudicación directa a la Gerencia en los supuestos previstos en el artículo 107.1 b) y c) del Reglamento General de Recaudación.

F) Acordar la iniciación de actuaciones de investigación a propuesta del Jefe del Servicio de Gestión Recaudatoria, cuando existan indicios razonables para presumir el levantamiento de bienes embargados.

G) Proponer cuando proceda, la declaración de fallidos para los deudores y otros responsables y la declaración de incobrables para los créditos, así como su revisión o rehabilitación en caso de solvencia sobrevenida.

H) Proponer cuando proceda legalmente, la adopción de acuerdo sobre prescripción de las deudas.

I) Las demás previstas en el articulado de esta Ordenanza.

e) Corresponderá a la Jefatura del Servicio de Gestión Recaudatoria, el ejercicio de las siguientes funciones:

i) Notificar la providencia de apremio dictada por el Tesorero, utilizando para ello los procedimientos informáticos previstos para el tratamiento masivo de documentos mediante huella digital.

ii) Requerir toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia para la recaudación de las deudas, en los términos previstos reglamentariamente.

iii) Recabar de las Entidades de depósito información sobre movimientos de las cuentas de todo tipo.

iv) Acordar la ejecución de garantías que no consistan en hipoteca, prenda con o sin desplazamiento u otras de carácter real.

v) Expedir mandamientos de anotación preventiva de embargo, cancelación de embargo y cargas, y demás documentos necesarios para la cumplimentación de actuaciones recaudatorias en los Registros públicos.

vi) Formalización de diligencias de embargo sobre toda clase de bienes y derechos.

vii) Nombrar depositarios de bienes embargados y su remoción.
viii) Actuar como Secretario de la Mesa de subasta levantando acta de las sesiones celebradas, incluyendo la prevista para el supuesto de adjudicación directa en el artículo 107.1a) del Reglamento General de Recaudación.

ix) Otorgar de oficio escrituras de venta de los bienes enajenados en caso de no otorgarlas los deudores.

x) Requerir a los deudores la presentación de los títulos de propiedad de los bienes embargados y, en caso de no presentarlos, dirigir mandamiento al Registrador de la propiedad para que, a costa de los deudores, libre certificaciones substitutivas.

xi) Publicar y notificar los anuncios de subasta, y todos los demás actos del procedimiento de apremio con sujeción a lo dispuesto reglamentariamente.

Las demás que expresamente se le asignen en el articulado de la presente Ordenanza.

Artículo 142. Durante el procedimiento de apremio y atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en los tributos de carácter local (elevado número de deudas y escasa cuantía), siempre que fuera posible, se facilitará la tramitación y el impulso de los expedientes en formato electrónico, utilizando procesos informáticos seguros en su elaboración para garantizar el correcto cumplimiento de las exigencias legales. En estos supuestos, los funcionarios y órganos a los que corresponda el ejercicio de los diferentes trámites, velarán por la correcta ejecución de los mismos, mediante el conocimiento y comprobación del buen funcionamiento de los aplicativos informáticos dispuestos para su realización.

Las notificaciones y demás trámites que fueran precisos durante el procedimiento de apremio, se elaborarán utilizando medios informáticos, y siempre que sea posible se generarán en documentos electrónicos con firma digital.

Artículo 143. 1. La providencia de apremio notificada al deudor es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.

2. Es órgano competente para dictar la providencia de apremio el Tesorero del Organismo, incluso para los supuestos en que se ejercite la facultad recaudatoria, por delegación de otras Administraciones públicas integradas en el territorio de la provincia.

3. Cuando el ejercicio de la facultad recaudatoria se haya iniciado por el propio Organismo en período voluntario, la providencia de apremio se dictará en base a una certificación de descubierto fiscalizada por la Intervención.

4. Cuando el ejercicio de la facultad recaudatoria se inicia una vez concluido el período voluntario, mediante cargo procedente de otras Entidades que hubieran delegado sus competencias en Diputación, la providencia de apremio se dictará en base a las relaciones certificadas de descubierto suscritas por el Interventor de la entidad titular de las deudas.

5. En los supuestos en que se ejerzan funciones recaudatorias por convenio de colaboración con otras entidades públicas distintas a los entes locales integrados en la provincia, la providencia de apremio corresponderá dictarla conforme al citado Convenio:

a) Al órgano competente de la entidad titular de los derechos, cuando la facultad recaudatoria haya sido asumida por encomienda y se refiera exclusivamente al período de apremio.

b) Al órgano competente del Organismo Autónomo, cuando la facultad recaudatoria haya sido asumida por delegación y comprenda la fase de ingreso en período voluntario.

6. La vía de apremio será improcedente si se hubiere omitido la providencia de apremio.

Artículo 144. Contra la procedencia de la vía de apremio, sólo serán admisibles los motivos de oposición que se determinan en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación vigente.

En el supuesto de ejercicio de la función recaudatoria por delegación de otras administraciones locales, la impugnación de los actos producidos en el curso del procedimiento apremio, fundamentada en motivaciones que aluden a las actuaciones llevadas a cabo por la administración delegante, ocasionará automáticamente la paralización de los trámites de ejecución y la remisión de la reclamación a la citada administración para que resuelva lo que proceda en derecho. Adoptada la resolución y comunicada formalmente al Organismo, procederá según lo dispuesto en la misma, la continuación del procedimiento de apremio o la baja en contabilidad de la deuda. En el supuesto de que transcurridos tres meses, no se hubiere dictado resolución por la administración titular del derecho, el Organismo procederá al descargo de la deuda por paralización injustificada del procedimiento.

Artículo 145. Sin perjuicio de las instrucciones que en cada caso se dicten sobre fijación de los plazos de vencimiento de los abonares en período ejecutivo, los plazos mínimos de ingreso de las deudas resultantes de liquidaciones apremiadas, serán los siguientes:

1. Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.

2. Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Artículo 146. Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, mediante resolución de la Tesorería, se podrán adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Artículo 147. 1. El procedimiento de apremio termina:

i. Con el cierre del expediente una vez pagado el débito.

ii. Con la declaración de incobrable total o parcial de los créditos, por declaración de insolvencia de los deudores principales y responsables solidarios o por la concurrencia de los requisitos previstos en la presente Ordenanza.

iii. Con el acuerdo de haber quedado extinguido el débito por cualquier otra causa legal.

2. En los casos de fallido total o parcial de la deuda por declaración de insolvencia, el procedimiento de apremio ultimado se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga noticias de que el deudor o responsable son solventes.

Si vencido este plazo no se hubiera rehabilitado la deuda, quedará esta definitivamente extinguida.

Artículo 148. 1. Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.

2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.

3. El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria y 36 de la Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias respectivamente.

4. El cálculo y pago de los intereses se realizará en el momento del pago de la deuda apremiada. Durante el plazo de vencimiento de un abonaré permanecerán inalterables los intereses calculados en el momento de su emisión, transcurrido este plazo,

si la deuda no resulta abonada, se actualizarán, y continuarán computándose de forma diaria, hasta la emisión de un nuevo abono.

5. No será necesaria la notificación expresa de los intereses devengados, si con ocasión de la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago y el cómputo del tiempo de devengo.

Artículo 149. 1. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 145 de esta Ordenanza sin haberse efectuado el ingreso requerido, el Jefe del Servicio de Gestión Recaudatoria iniciará el procedimiento para el embargo de bienes y derechos en cantidad suficiente hasta cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y costas que se produzcan.

Cuando las deudas providenciadas de apremio fueran objeto de acumulación a un expediente ejecutivo ya iniciado con anterioridad, se continuará la tramitación en la fase que se encontrara el expediente. No obstante, en los sucesivos trámites de ejecución, se informará al deudor del nuevo importe que representan las deudas perseguidas en el expediente.

2. Realizadas actuaciones para la investigación de bienes y derechos del deudor susceptibles de ser embargados, se elevará propuesta de traba a la Jefatura del Servicio de Gestión Recaudatoria que dictará la correspondiente diligencia de embargo, guardando el orden de prelación legalmente establecido.

Artículo 150. La ejecución de los embargos se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, con las siguientes especificaciones:

-La Gerencia del Organismo designará de entre el personal que no ostenta la condición de funcionario, aquellos trabajadores que habrán de desempeñar funciones de Agentes de Recaudación. Los Agentes de Recaudación, contarán con acreditación oficial y actuarán en todo el ámbito provincial, incluidos los municipios donde la Diputación no ejerza competencias delegadas por los Ayuntamientos sobre gestión recaudatoria.

Será cometido de estos Agentes la realización de actuaciones de carácter material necesarias durante el procedimiento de apremio y previamente ordenadas por la Tesorería o la Jefatura del Servicio de Recaudación, tales como: Realización de notificaciones personales; Investigación de bienes susceptibles de embargo; Tramitación de actuaciones ante Ayuntamientos, Registros Civiles y Mercantiles y otros organismos oficiales; cumplimentación de las ordenes contenidas en las diligencias de embargo, etc.

-El embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en Entidades de depósito, podrá tramitarse utilizando medios informáticos y/o telemáticos, siguiendo los procedimientos normalizados establecidos al efecto por el Consejo Superior Bancario, la Confederación de Cajas de Ahorro y las normas aceptadas para el funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial. La Presidencia, podrá dictar las instrucciones que fueran necesarias para facilitar su correcto funcionamiento.

c) A efectos de respetar el principio de proporcionalidad entre el importe de la deuda y los medios utilizados para su cobro, únicamente podrán llevarse a cabo las siguientes actuaciones de ejecución, para deudas cuya cuantía total por principal, no supere los 500 euros:

c.1. Deudas cuyo pendiente de cobro por principal es igual o inferior a 6 euros:

i. Concluido el plazo de cobro voluntario, no procederá la tramitación de la vía de apremio hasta tanto el deudor no acumule una nueva deuda por importe superior a 6 euros, o bien, el importe

acumulado de las deudas inferiores a 6 euros supere los 12 euros. Transcurridos más de 3 años desde el fin del período voluntario sin que se haya iniciado la tramitación del apremio, se procederá a la baja en cuentas de las deudas iguales o inferiores a 6 euros, previa fiscalización de Intervención.

ii. No obstante, dentro del plazo de prescripción, podrán rehabilitarse éstas deudas cuando su importe acumulado para un mismo deudor supere los 12 euros.

c.2. Deudas cuyo importe pendiente de cobro por principal se encuentre comprendido entre más de 6 € y 250 €:

a) Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas en dos Entidades de depósito.

b) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.

c) Sueldos salarios y pensiones.

c.3. Deudas cuyo importe principal se encuentre comprendido entre mas de 250 € y 500 €. Atendiendo a su mayor facilidad de enajenación y a la menor onerosidad para el obligado al pago, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones de ejecución:

a) Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas al menos en dos Entidades de depósito.

b) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.

c) Sueldos salarios y pensiones.

d) Intereses, rentas y frutos de toda especie.

e) Embargo de vehículos.

d) Cuando el resultado de las actuaciones de embargo expresadas en el apartado anterior sea negativo, se formulará propuesta a la Presidencia, previa fiscalización de la Intervención, para la baja en cuentas de las deudas. No obstante, en tanto no prescriba la acción para exigir el pago, podrá acordarse su rehabilitación, en los siguientes supuestos:

d.1. Cuando se detecte la existencia de nuevos bienes embargables en razón de la cuantía acumulada de la deuda.

d.2. Cuando se generen nuevos créditos contra el mismo deudor que notificados de apremio y no satisfechos, acumulados a los que estuvieren de baja sumen una cuantía superior a los 500 euros.

d.3. A solicitud del deudor cuando manifieste la posibilidad de hacer frente al pago de alguna deuda.

e) En los casos de embargo de bienes inmuebles, una vez tramitada la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad para el aseguramiento del crédito, se actuará atendiendo a los siguientes criterios:

e.1. En aplicación del principio de proporcionalidad y con el fin de evitar la enajenación de bienes cuyo importe es muy superior a la deuda, atendiendo a la naturaleza periódica de una gran parte de los tributos locales, no se iniciará el procedimiento de enajenación hasta tanto la deuda acumulada del obligado al pago no alcance el importe mínimo de 5.000 euros en concepto de principal, o alternativamente un importe igual o superior al 20 por ciento del valor neto estimado del inmueble.

Cuando el bien inmueble embargado constituya la residencia habitual y constase acreditada una situación económica de necesidad en el obligado al pago y el resto de miembros de la familia que convive con él, considerando los costes extraordinarios que conllevaría para la Administración la situación derivada del desahucio, no se iniciará el procedimiento de enajenación hasta tanto la deuda acumulada del obligado al pago no alcance el importe mínimo de 25.000 euros en concepto de principal, o alternativamente un importe igual o superior al 50 por ciento del valor neto estimado del inmueble.

Excepcionalmente, cuando el obligado al pago sea una empresa disuelta o sin actividad, una persona fallecida sin herederos conocidos o una herencia yacente sin que consten herederos identificados con disposición a aceptar la herencia, así como cuando la titularidad del inmueble fuese desconocida por cualquier otra circunstancia, considerando la inoperancia del principio de proporcionalidad, se procederá a la ejecución del inmueble para el cobro de las deudas pendientes sin atender a limitación alguna en cuanto a su cuantía, manteniendo la aplicación de los criterios fijados en el apartado e.3.

e.2. Transcurridos tres años desde la notificación de la diligencia de embargo sin que el importe de la deuda acumulada haya alcanzado el importe mínimo exigido para iniciar la enajenación del inmueble y siempre que no existieran otros bienes susceptibles de embargo, se procederá a la declaración del crédito como incobrable. Cuando la acumulación de créditos contra el deudor no prescritos alcancen el importe mínimo fijado para la enajenación del inmueble, se procederá a la rehabilitación de la deuda y la continuación de las actuaciones para la ejecución del bien.

e.3. Acordada la enajenación del inmueble, solo podrán aceptarse ofertas para su adjudicación por importes que sean iguales o superiores al 30 por 100 del tipo de licitación o que al menos cubran el importe total de la deuda. En el caso de que el inmueble constituya la vivienda habitual, las ofertas deberán alcanzar necesariamente el 50 por 100 del referido tipo de licitación.

f) El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados será la subasta pública salvo que sea expresamente aplicable otra forma de enajenación. El Tesorero del Organismo acordará la enajenación mediante subasta señalando día, hora y local en que habrá de celebrarse y el tipo para licitar.

La mesa para la subasta de bienes embargados estará compuesta por los titulares de los siguientes puestos, o en su caso, por quienes legalmente les sustituyan:

- a) La Tesorería del Organismo que actuará como Presidente.
- b) La Jefatura del Servicio de Gestión Recaudatoria que interviendrá como Secretario.
- c) La Intervención del Organismo.

La Jefatura del Departamento de Recaudación Ejecutiva, asistirá a la mesa de subasta en todas aquellas tareas que puedan encomendársele para el correcto desempeño de sus funciones.

Artículo 151. 1. Las deudas que no hayan podido hacerse efectivas en el período de apremio, por insolvencia del deudor y de los demás responsables, se declararán créditos incobrables mediante resolución del Presidente del Organismo, previa fiscalización de la Intervención.

Se declararán así mismo como incobrables los créditos, con independencia de su cuantía, cuando realizadas las actuaciones oportunas de comprobación no sea posible la expedición de la providencia de apremio, bien por desconocerse la denominación completa del deudor, el número de identificación fiscal o cualquier dato imprescindible para su correcta identificación.

La Presidencia del Organismo, podrá dictar instrucciones sobre los trámites necesarios que deberán cumplimentarse para la justificación de los expedientes de declaración de insolvencia.

No obstante lo anterior, atendiendo a los criterios de eficiencia y proporcionalidad que deben presidir las actuaciones administrativas, se entenderá suficiente para que sea declarada como incobrable la deuda, la justificación de las actuaciones previstas en los siguientes apartados:

f. Cuando la cuantía de la deuda pendiente por principal sea inferior a 5.000 euros, en el supuesto contemplado en el artículo 150 e) de esta Ordenanza:

vii. La notificación de la providencia de apremio en la forma legalmente prevista.

viii. La inexistencia de bienes susceptibles de embargo, excluidos los bienes inmuebles.

i. Cuando la cuantía de la deuda pendiente de cobro no supere los 500 euros de principal y, siempre que la identificación del deudor disponga de NIF/NIE:

x. La notificación de la providencia de apremio en la forma legalmente prevista.

xi. El intento negativo de embargo previsto en el artículo 150 de esta Ordenanza, atendiendo a la cuantía de la deuda.

c. Cuando la cuantía de la deuda pendiente de cobro no supere los 300 euros de principal, será suficiente la acreditación del fallecimiento del deudor.

d. Cuando la cuantía de la deuda pendiente de cobro no supere los 500 euros de principal, será suficiente la acreditación de la disolución de la empresa.

2. Realizados los trámites reglamentarios, el expediente pasará a fiscalización de la Intervención de fondos, quien podrá devolverlo al Servicio de Recaudación en el caso de que pudieran aportarse nuevos elementos de juicio sobre el paradero o bienes del deudor perseguido, en el supuesto de no poderse aportar nuevos datos o acreditarse la imposibilidad o ineficacia práctica de poder continuar el procedimiento con base en los nuevos datos facilitados, la Tesorería elevará la oportuna propuesta de falencia.

3. Una vez aprobado el expediente por la Presidencia, se formalizará la correspondiente data para la baja del crédito en las respectivas cuentas.

4. Mediante resolución de la Presidencia del Organismo, podrá acordarse la declaración de fallido de un deudor por referencia al expediente tramitado por otra Administración pública.

5. En los supuestos de ejercicio por el Organismo Autónomo de facultades de recaudación asumidas por delegación de otras Administraciones públicas titulares de la exacción, los expedientes de créditos incobrables una vez concluida su tramitación, según el procedimiento antes descrito, serán aprobados igualmente por el Presidente del Organismo, remitiéndose posteriormente a la Administración delegante para su baja en contabilidad.

6. Se formará un fichero provincial de contribuyentes fallidos que contenga los antecedentes necesarios para poder reclamar el débito, dentro del plazo de prescripción, si el deudor fuere localizado o hubiera adquirido solvencia cualquiera de los obligados.

7. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior a la declaración se considerarán vencidos y serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados o responsables.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los expedientes que se encontraren en fase de tramitación a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se registrarán por la misma en todas aquellas disposiciones que supongan un tratamiento más favorable al interesado, en caso contrario se concluirá su tramitación conforme a la normativa anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones contenidas en las distintas Ordenanzas fiscales provinciales que se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente Ordenanza General.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza General entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resultando de aplicación hasta que se acuerde su modificación o dero-

gación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 14 de junio de 2018. Firmado electrónicamente en Córdoba por el Vicepresidente 4º, Salvador Blanco Rubio.

Núm. 2.106/2018

Mediante mi Decreto de 14 de junio actual, insertado en el libro de resoluciones con el número 2018/3436 he resuelto lo siguiente:

“En relación con los distintos procesos selectivos que se están tramitando en esta Diputación, derivados tanto de las distintas Ofertas de Empleo Público de 2014, 2015 y 2016 como para coberturas por necesidades transitorias de personal temporal, pendientes de resolución y,

De conformidad asimismo con lo establecido en el artículo 16. j) del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Promoción Interna y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y las propias bases de las convocatorias que establecen que desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 5 días hábiles y máximo de 45 días hábiles.

Dado el periodo estival que comienza y ante las posibles dificultades de comunicación y localización que se puedan generar tanto entre los aspirantes como para los miembros de los Tribunales/Comisiones de Selección (en su caso) de los distintos procesos selectivos que pueda verse comprometida la normal continuidad de los procesos selectivos en marcha, a fin de garantizar un adecuado desarrollo de las pruebas, en uso de las atribuciones que tengo conferidas vengo en resolver:

Primero. Declarar inhábil el mes de agosto de 2018 a efectos de celebración de ejercicios y de cómputo de plazos entre los mismos, derivados de entre las distintas ofertas de empleo público citadas, así como de las convocatorias para cubrir necesidades temporales de personal.

Segundo. Publicar la presente Resolución con indicación de que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse, según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 3972015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, potestativamente, Recurso de Reposición ante el mismo órgano que dicta la resolución, en el plazo de un mes, o bien directamente, Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ambos a partir del día siguiente de su publicación. Asimismo, podrá presentarse cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.”

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, a 16 de junio de 2018. El Presidente. PD. Firmado electrónicamente por el Diputado Delegado de Hacienda, RR.HH. y Gobierno Interior, Salvador Blanco Rubio.

Ayuntamiento de La Carlota

Núm. 2.136/2018

Don Antonio Granados Miranda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), hace saber:

Que se ha aprobado Resolución número 1595/2018, de 18 junio, de la Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto que por Resolución de la Alcaldía número 499/2018, 2 marzo de 2018 se aprobaron las Bases que han de regir el proceso de selección de una plaza de Oficial de la Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Oficial, perteneciente al subgrupo C1, mediante promoción interna y por el procedimiento de concurso de méritos.

Visto que las Bases completas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, número 52 de 15 de marzo de 2018.

Visto que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 58 de 23 de marzo de 2018, se publicaba extracto de la convocatoria.

Visto que el Boletín Oficial del Estado, número 85 de 7 de abril de 2018, se publicaba extracto de la convocatoria, contándose desde la fecha de esta publicación el plazo de veinte días hábiles para la presentación de solicitudes.

Considerando: que por Resolución de la Alcaldía número 1280/2018, de 22 de mayo, se aprobó la lista provisional de admitidos/as y excluidos, en el presente proceso selectivo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2017, publicando anuncio de la citada Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 104 de 1 de junio, remitiendo a la publicación de la Resolución provisional completa en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la página web municipal, www.lacarlota.es, otorgando un plazo de 10 días hábiles para su subsanación.

Considerando: Que no se han producido alegaciones por los aspirantes, tras la finalización del plazo de exposición al público de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

En virtud de las atribuciones conferidas por la legislación de Régimen Local vigente, esta Alcaldía, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, por promoción interna, de una plaza vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de La Carlota, perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Oficial de la Policía Local, en la forma indicada a continuación:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS

Apellidos y Nombre	D.N.I.
1 Bermudo Baena, Andrés	*849F
2 Rojas Carmona, Rafael	*197A
3 Sánchez Muñoz, Miguel Ángel	*464P

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS

-Ninguno/a.

Segundo. Establecer la composición del Tribunal y realizar el nombramiento de los miembros que lo integran que habrá de constituirse para el desarrollo del proceso selectivo:

Presidenta:

-Titular: Doña María Francisca del Moral Lucena. Técnica de Gestión-Jefa del Negociado de Personal del Ayuntamiento de La Carlota.

-Suplente: Doña María Ángeles Córdoba Rovira, Administrativa del Ayuntamiento de La Carlota.

Vocales:

-Titular: Don Agustín Alcalá Malagón. Subinspector-Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de La Carlota.

-Suplente: Don Rafael García García. Policía Local del Ayuntamiento de La Carlota.

-Titular: Don Pedro Luis Mármol Martínez. Policía Local del

Ayuntamiento de La Carlota.

-Suplente: Don Rafael Serrano López. Policía Local del Ayuntamiento de La Carlota.

-Titular: Don Rafael Mohedano Alcántara. Tesorero del Ayuntamiento de La Carlota.

-Suplente: Don Simón M. Aguayo Pérez. Coordinador Gestión Urbanismo del Ayuntamiento de La Carlota.

-Titular: Doña Lourdes de Julián Ramírez. Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de La Carlota.

-Suplente: Doña Susana María Ramos Fernández. Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de La Carlota.

Secretario/a:

-Titular: Doña Isabel García Jaime. Secretaria General del Ayuntamiento de La Carlota.

-Suplente: Don José Gracia Zafra. Coordinador Servicios Generales del Ayuntamiento de La Carlota.

Tercero. Convocar a los miembros del Tribunal Calificador para el día 22 de junio de 2018, a las 8,00 horas, en el Negociado de Personal del Ayuntamiento de La Carlota, para proceder a la valoración de los méritos alegados por los aspirantes, dentro de la presente Convocatoria.

Cuarto. Publicar un anuncio de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Carlota (www.lacarlota.es), declarando aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos.

Los sucesivos anuncios referentes a esta Convocatoria serán publicados únicamente en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Carlota (www.lacarlota.es).

Quinto. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Don Antonio Granados Miranda, de lo que yo como Secretaria General doy fe. La Carlota".

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de la resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, se podrá interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con el artículo 46 de la citada Ley jurisdiccional.

En el supuesto de que fuese interpuesto Recurso Potestativo de Reposición, el plazo para interponer el Recurso Contencioso-Administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del Recurso Potestativo de Reposición, o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado. No obstante se podrá ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso estime procedente.

La Carlota, a 19 de junio. Firmado electrónicamente por el Alcalde-Presidente, Antonio Granados Miranda.

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 2.073/2018

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

ÍNDICE

Preámbulo
Bases reguladoras
Capítulo preliminar. Clases de prestaciones económicas y justificación
Capítulo I.- Criterios comunes a todas las ayudas
Primera. Ámbito de aplicación y confidencialidad
Segunda. Criterios económicos
Tercera. Procedimiento
Capítulo II.- Ayudas económicas familiares
Cuarta. Definición
Quinta. Personas beneficiarias
Sexta. Procedimiento
Séptima. Criterios adicionales de concesión
Capítulo III.- Ayudas de emergencia social
Octava. Definición
Novena. Objetivos
Décima. Personas beneficiarias
Undécima. Obligaciones de las personas beneficiarias
Duodécima. Requisitos de concesión
Décima tercera. Tipos de ayudas
Décima cuarta. Conceptos y cuantías
Décima quinta. Periodicidad
Décima sexta. Procedimiento específicos
Capítulo IV.- Ayudas para el suministro de agua
Décima séptima. Concepto y personas beneficiarias
Décima octava. Procedimiento
Capítulo V.- Ayudas para abono de las deudas de suministro eléctrico
Décima novena. Objeto y procedimiento
Vigésima. Bono social
Capítulo VI.- Ayudas al alquiler de vivienda
Vigésima primera. Definición y clases
Vigésima segunda. Procedimiento
Vigésima tercera. Requisitos de personas beneficiarias
Vigésima cuarta. Requisitos e importe de las ayudas
Vigésima quinta. Extinción, reintegro y modificación
Anexo I.- Solicitud de ayuda social.
Anexo II.- Informe acreditativo de las circunstancias especiales para solicitarse el bono social.
Anexo III.- Cuenta justificativa simplificada.

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES PREÁMBULO

I. Las ayudas complementarias de Servicios Sociales han sido reguladas durante varios años –la más reciente de 2015- mediante instrucciones internas o circulares dirigidas a las Zonas de Trabajo Social (conocidas en la Ley 9/2016, que sustituye a la anterior Ley de Servicios Sociales de 1988, como Zonas Básicas Comunitarias). El uso de esa herramienta estaba justificado hasta la fecha en la conveniencia de no someter esas ayudas a concurrencia pública, dado que se perdería su naturaleza de ayudas vinculadas a la intervención de los Servicios Sociales Comunitarios con personas o familias de la respectiva Zona o ámbito territorial de actuación, en función de la política social vigente en el Ayuntamiento. En tal sentido, la complementariedad con respec-

to a otras actuaciones o recursos es el rasgo determinante de estas ayudas.

II. El Programa de Ayudas Complementarias se aprobó dentro del conjunto de programas y proyectos de Servicios Sociales por acuerdo de Junta de Gobierno Local número 1061/15, de 13 de noviembre de 2015, a efectos de su consideración como competencia propia del Ayuntamiento de Córdoba; ayudas que comprendían las económicas familiares y las de emergencia.

III. Tras la aprobación en 2016 de la vigente Ley de Servicios Sociales de Andalucía se pasa a llamar a este tipo de prestaciones económicas de servicios sociales, planteándose la actualización y desarrollo del Programa conteniendo los criterios y requisitos de concesión de ayudas sociales por el Ayuntamiento, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para dar respuesta a las exigencias de transparencia, independientemente de su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones; bien entendido que por su naturaleza este tipo de ayudas presenta peculiaridades que se recogen en la Ordenanza General de Subvenciones (artículo 11, apartado 6).

Con arreglo a las anteriores consideraciones, el Programa se desarrolla a través de las siguientes

BASES REGULADORAS

CAPÍTULO PRELIMINAR

Clases de prestaciones económicas y justificación

Las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía pueden ser prestaciones de servicios o prestaciones económicas. Éstas, según las define el artículo 40 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA), consisten en:

Entregas dinerarias de carácter puntual o periódico concedidas a personas o unidades de convivencia orientadas al logro de los objetivos de la política de servicios sociales de Andalucía o que coadyuven al logro de las finalidades compartidas con otros sistemas o políticas públicas. El artículo 44 de la Ley 9/2016 reconoce a los ayuntamientos, según su ámbito competencial, la gestión de las prestaciones económicas previstas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. También según la LSSA, corresponde a los Servicios Sociales Comunitarios (artículo 28, función 22ª) la organización y gestión de las prestaciones garantizadas y condicionadas que, según el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, sean ofertadas desde los Servicios Sociales Comunitarios.

El Decreto 11/1992, de 28 enero, sobre naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios, distingue en su artículo 7 tres tipos de prestaciones económicas a las que califica de complementarias de las prestaciones de servicios, y que tienen un carácter urgente o coyuntural, a saber, ayudas de emergencia social, ayudas económicas familiares y otras ayudas que puedan establecerse.

a) Ayudas de emergencia social: Aquellas prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez; por esta razón, el pago de las mismas es anticipado a efectos de la Ley General de Subvenciones.

b) Ayudas económicas familiares: Son prestaciones temporales de carácter preventivo que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de los recursos económicos suficientes para ello, con el fin de evitar la institucionalización de menores y posibilitar su integración en el entorno familiar y social. Este segundo tipo de ayudas se regulan, además de por las presentes Bases, por la

Orden de 10 de octubre de 2013.

c) Ayudas para el alquiler de vivienda: ayudas dirigidas a personas en situación de exclusión y crisis habitacional, para las cuales el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de VIMCORSA en la gestión mediante un convenio y con arreglo a un Programa de Ayudas que establece los criterios específicos aplicables a esas ayudas.

El Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, que entre otras medidas establecía las ayudas para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, ha sido derogado por el más reciente Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. No obstante, se regulan en estas Bases las especialidades en cuanto a requisitos o procedimiento para las ayudas de emergencia en materia de suministros, de agua o de electricidad.

Justificación. Los beneficiarios de las ayudas, deberán justificar, en el plazo de dos meses desde la percepción de la ayuda, la realidad del gasto mediante factura original o documento de valor probatorio equivalente, ante el personal de Trabajo social de su Centro de Servicios Sociales Comunitarios, para la elaboración la cuenta justificativa simplificada, o bien, para la tramitación del pago del gasto incurrido mediante documento de endoso.

Las presentes Bases regulan las convocatorias que anualmente se aprueben por la Junta de Gobierno Local, donde se determinarán los respectivos importes y aplicaciones presupuestarias para la concesión directa de cada modalidad de ayuda; ello con independencia de las modificaciones de crédito que pudieran afectar a dichas partidas para aumentar su importe.

CAPÍTULO I

Criterios Comunes a todas las ayudas

Primera. Ámbito de aplicación y confidencialidad

Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del nivel primario de servicios sociales, es decir, son el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, tratamiento, seguimiento, evaluación de la atención y coordinación con otros agentes institucionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, garantizando la universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad. A efectos del presente Programa, las referencias al equipo técnico de los Centros de Servicios Sociales incluirán también, en su caso, a los Equipos de Tratamiento Familiar.

Dentro del ámbito de aplicación de los servicios sociales comunitarios se encuentran las prestaciones sociales económicas descritas en el capítulo preliminar. En relación con estas ayudas o prestaciones sociales, se dará el tratamiento de confidencialidad de la información sobre las mismas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a los efectos prevenidos en el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones.

Segunda. Criterios económicos

Las ayudas sociales reguladas por estas Bases son compatibles entre sí y, dada su naturaleza social, las personas beneficiarias no estarán obligadas a acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

Para determinar la falta de recursos económicos en el acceso a las ayudas económicas, se establece que el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que integran la unidad familiar sea inferior a los umbrales económicos que se exponen a continuación. En este sentido, se tomará para cada ejercicio presupuestario como referencia el IPREM anual (12 pagas), en función de las personas miembros de la unidad familiar, según la es-

cala de equivalencia de la Unidad de Consumo definida por el Instituto Nacional de Estadística y aplicando los valores recogidos en dicha escala.

Sin perjuicio de la actualización anual -ya sea en la propia convocatoria de ayudas o mediante circular o instrucción interna- de las cuantías por referencia al Indicador de Renta de Efectos Múltiples que se apruebe en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, los resultados económicos para 2018 según el número de miembros de la unidad familiar son:

[Se toma como base la familia de 4 miembros, sumándose o restándose una cuantía fija (921,12 €) según existan más o menos miembros con arreglo a esa unidad familiar estándar de cuatro. Este criterio procede de la Orden de 10/10/2003 sobre Ayudas Económicas Familiares, Anexo II, apartado 3.3, que aplica el IPREM anual a la familia estándar de 4 miembros y usa idéntico criterio de suma o resta empleado en este Programa]

1 miembro	3.688,02
2 miembros	4.610, 02
3 miembros	5.532,03
4 miembros	6.454,03
5 miembros	7.376,03
6 miembros	8.298,04
7 miembros	9.128,74
Miembro de más	921,12

Ingresos computables a efectos de importe máximo de ingresos:

a) Se considerarán ingresos computables a la unidad familiar los rendimientos derivados de actividades empresariales o profesionales y percepciones salariales por cuenta ajena; pensiones, prestaciones económicas o análogos, donaciones, herencias o ingresos que en cualquier concepto (incluidos los subsidios de rentas mínimas) perciban o tengan derecho a percibir todos/as los miembros de la misma en el momento de la tramitación de la ayuda, es decir, los ingresos mensuales en el momento de la solicitud; o, en su caso, el computo de la renta anual obtenida durante el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud o, en su caso, los ingresos de los últimos doce meses.

b) Asimismo, tendrán la consideración de recursos computables los bienes muebles e inmuebles poseídos por cualquier título jurídico por las personas miembros de la unidad familiar. Sin embargo, no se consideran recursos computables la propiedad o mera posesión de la vivienda habitual ni la prestación por hijo a cargo.

Con carácter general, se priorizarán las ayudas económicas dirigidas a unidades familiares que no hubieran sido beneficiarias con anterioridad.

En relación con los criterios económicos expuestos, en el caso de modificación sustancial de la situación económica de la unidad familiar, deberá informarse y acreditarse documentalmente.

El incremento de la cuantía de la prestación, solo cuando concurren necesidades extraordinarias, se acreditará mediante informe social expreso que justifique el incremento del importe.

Tercera. Procedimiento

1) El procedimiento es por concesión directa, partiendo del derecho de la ciudadanía al acceso a los recursos y con arreglo a lo establecido en estas Bases; se inicia a través de la concertación de cita con la persona Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios que corresponda y la posterior solicitud de ayuda con arreglo a la orientación dada, según modelo establecido en el Anexo I a estas Bases. No se admitirán solitu-

des de ayuda al margen de la entrevista concertada.

2) Las prestaciones económicas deben ir precedidas de la valoración de un pronóstico positivo resolviendo la problemática detectada, haciéndose constar en el informe social o proyecto de intervención, especialmente en las ayudas económicas familiares. En caso de darse alguna situación excepcional por sobrepasar el computo del límite económico la unidad familiar o cualquier otra que se pudiera dar a juicio de la persona informante, se justificará aquella expresamente en el Informe Social/Proyecto de Intervención Familiar.

3) La documentación que se remita desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios a la Unidad de Gestión de Recursos constará al menos de:

-Propuesta técnica.

-Informe social o Proyecto de Intervención acreditando el cumplimiento de los requisitos y la motivación de la propuesta.

-Modelo cumplimentado según aplicación contable Sicalwin y fotocopia de DNI/NIE.

-Acuerdo-compromiso de intervención y de justificación firmado por la persona beneficiaria y la profesional responsable.

-En su caso, Plan de trabajo o intervención con la expresión de los objetivos a los que esta condicionada la percepción de la ayuda.

-Se acompañará a la documentación una solicitud.

4) Resolución. Iniciado el procedimiento de concesión de la ayuda con la presentación de la solicitud, se imprimirá agilidad al expediente con objeto que la resolución del mismo desde la presentación de la solicitud hasta el momento efectivo del abono de la ayuda no sea superior a un mes.

Las ayudas quedarán supeditadas a la disponibilidad presupuestaria y se concederán o denegarán por Decreto de la Delegación de Servicios Sociales, sin perjuicio de los recursos que sean procedentes.

Contra la resolución que recaiga que pondrá fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, con carácter potestativo el recurso de reposición en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción competente, en el plazo de dos o seis meses, según que la resolución del expediente se produzca de manera expresa o presunta.

CAPÍTULO II

Ayudas Económicas Familiares

Cuarta. Definición

Las Ayudas Económicas Familiares (AEF) son una prestación complementaria normalmente periódica y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a aquellas familias que carecen de recursos económicos suficientes para la atención de necesidades básicas de menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación; dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para esas personas menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, y evitar así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.

Quinta. Personas Beneficiarias

Son destinatarias de las ayudas las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender sus necesidades básicas, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado; debiendo cumplir como requisi-

tos:

- Residencia en el término municipal.
- Insuficiencia de recursos económicos en el hogar donde la persona menor de edad resida o se reintegre, acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 6.3. (Requisitos económicos para la concesión de ayudas).
- Existencia de necesidades básicas de la persona menor que deban ser cubiertas.
- Cuando concurren disfunciones educativas y psico-sociales que puedan suponer un riesgo para el desarrollo integral de las personas menores, será imprescindible la existencia y aceptación por parte de la familia de un Proyecto de Intervención Familiar que contribuya a superar la situación; proyecto aceptado mediante compromiso escrito de la familia, en función de sus posibilidades de cambio y conforme a los objetivos planteados en el mismo.
- La valoración de un pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática detectada, entendiéndose como tal la existencia de predisposición o voluntad para la atención adecuada de las necesidades de las personas menores de edad afectadas, salvo otras circunstancias debidamente motivadas en el informe social.

Sexta. Procedimiento

6.1. Finalidad

Las familias que cumplan con estos requisitos podrán recibir ayudas económicas dinerarias o en especie, de carácter periódico o único y se destinarán a la cobertura de necesidades por el siguiente orden de prioridad:

- a) Necesidades básicas, entendiéndose por estas la adquisición de alimentos, ropa, calzado, productos de aseo personal e higiene doméstica, provisión de leche de continuidad, así como de medicamentos (que requerirán en todo caso de prescripción médica).
- b) Otras necesidades: pañales, material escolar no financiado por la Consejería competente en materia de Educación, acceso a recursos educativos que desempeñen una función de integración de la persona menor; e igualmente gastos derivados de transporte u otros cuando se recoja motivadamente en la prescripción del informe social.
- c) Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse: alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, cuando incidan directamente en el bienestar de la persona o personas menores afectadas.

6.2. Documentación y tramitación

La concesión de las ayudas será tramitada por el equipo técnico del respectivo Centro de Servicios Sociales Comunitarios en los supuestos de unidades familiares con menores a cargo que cumplan los requisitos detallados anteriormente.

Durante todo el procedimiento, se deberá asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos de los y las menores y sus familias.

A) Iniciación. Partiendo de la previa cita concertada, la documentación que debe aportar la persona con la solicitud para acreditar el cumplimiento de los requisitos será:

- 1) Libro de familia y DNI/NIE de la persona solicitante.
- 2) Documentación acreditativa de la necesidad específica de las personas menores que no pueda ser atendida, cuando sea preceptiva.
- 3) Declaración Expresa Responsable de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar.
- 4) Cualquier otra documentación que se considere necesaria, según criterio técnico de los Servicios Sociales Municipales, para

la acreditación de la situación socioeconómica y familiar de la unidad de convivencia; no siendo necesario aportar documentación que ya obre en poder del Ayuntamiento.

5) Una vez comprobada toda la información y considerado, por parte de los Servicios Sociales Comunitarios que la unidad familiar cumple las condiciones establecidas en el apartado anterior, se elaborará:

-Informe social poniendo de manifiesto la necesidad de prestación de una ayuda dineraria o en especie, única o periódica y, en este caso, propuesta de temporalización.

-Proyecto de Intervención Familiar que contribuya a superar la situación, en su caso, sobre la base del compromiso de la familia, en función de sus posibilidades de cambio y conforme a los objetivos planteados en aquel.

B) Proyecto de Intervención Familiar. Cuando se elabore dicho proyecto, incluirá el documento en el que se contemplen los compromisos que asume la familia para acceder a la ayuda y la intervención que se llevará a cabo por parte de los Servicios Sociales Comunitarios. En la valoración de las circunstancias de las familias, se tendrán en cuenta preferentemente los siguientes criterios:

- Familias numerosas con título de Familia Numerosa.
- Familias monoparentales o con ausencia de un miembro clave para la manutención y/o cuidado de las personas menores a su cargo (por defunción, enfermedad, separación u otra circunstancia).
- Familias con alguno/a de sus miembros con discapacidad igual o superior al 33 por ciento o en situación de dependencia.
- Familias con menores de reciente desinstitucionalización reintegrados a su familia de origen, o en proceso de reunificación familiar a punto de ultimarse.

C) Propuesta. Analizado el informe social y, en su caso, el Proyecto de Intervención Familiar, el Equipo de los Servicios Sociales Comunitarios o, en su caso, la Comisión Técnica de Seguimiento elevarán propuesta de resolución de concesión o denegación de la ayuda, condiciones de la misma, así como los compromisos y obligaciones a contraer por las personas beneficiarias en cuanto a la finalidad para la que se concede.

D) Resolución. La Delegación de Servicios Sociales resolverá motivadamente, en atención a la propuesta formulada, la concesión o denegación de la ayuda; establecerá, en su caso, las condiciones de la misma.

La eficacia de la resolución estará condicionada a la suscripción por la persona destinataria de la ayuda del documento en el que se asuman las obligaciones y compromisos que se determinen con relación a la finalidad para la que se concede la misma.

E) Notificación. La resolución será notificada a la persona interesada en la forma establecida al efecto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para los supuestos de suspensión, modificación y cese de la ayuda, el procedimiento a seguir será el mismo previsto para su concesión.

6.3. Requisitos económicos para la concesión y asignación de las ayudas

Para determinar la falta de recursos económicos, a efectos del apartado 2 (Criterios Económicos), se utilizará un criterio restringido de unidad familiar, definida como la constituida por las personas menores de edad y aquella o aquellas que ostentan su patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar (formalizado o no), que residan en la misma vivienda. No se incluyen personas con otra vinculación, aunque residan en el mismo domicilio.(1)

Siempre que queden garantizadas las ayudas a las familias que

reúnan ese requisito de unidad familiar nuclear y si hay disponibilidad presupuestaria, se podrán incluir otras familias que por sus circunstancias o especiales necesidades sean propuestas de manera motivada por los Servicios Sociales Comunitarios o por la Comisión Técnica.

Las AEF estarán definidas y cuantificadas en el informe social tanto en su importe como en su modalidad y duración, en función de las necesidades de cada caso y de los ingresos de la unidad familiar.

El importe mensual de las ayudas a una familia se determina por el número de personas menores de edad que convivan en el domicilio familiar, con la siguiente distribución; bien entendido que la tabla refleja las respectivas cantidades con destino a financiar gastos derivados de necesidades básicas, por lo que si además concurren necesidades extraordinarias podrán aumentarse estas cantidades para poder atenderse. La tabla que a continuación se expresa es por referencia al IPREM, por lo que anualmente podrá variar en función del IPREM aprobado en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, comunicándose a los CSSC mediante Circular o Instrucción de la Dirección General de Servicios Sociales (en la tabla del Programa se aplica el IPREM de 2018):

Familia con 1 menor	50% IPREM	2018: 269 €
Familia con 2 menores	Incremento 15% *	2018: 309 €
Familia con 3 menores	Incremento 25%	2018: 336 €
Familia con 4 menores	Incremento 35%	2018: 363 €
Familia con 5 o más menores	Incremento desde 5º **	2018: 93 €

* Sobre la cuantía de familia con 1 menor.

** Importe para 2018= 363+93 (5º)+93 (6º), etc.

6.4. Duración

Las ayudas periódicas serán revisables mensualmente, estableciéndose para su percepción de forma continuada un periodo máximo de seis meses, con posibilidad de revisión. Excepcionalmente, se podrán prorrogar hasta otros seis meses más (total, un año), siempre que se hayan cumplido los objetivos intermedios del proyecto de intervención y persistan las circunstancias que motivaron su concesión, con un pronóstico de evolución favorable en la situación familiar.

Para la percepción de una nueva ayuda de carácter periódico deberán transcurrir, como regla general, seis meses para la tramitación de otra.

6.5. Modificación, suspensión y cese

A) Modificación. Las condiciones establecidas para las Ayudas Económicas Familiares en cuanto a su modalidad y cuantía, podrán modificarse cuando varíen las circunstancias que dieron lugar a su concesión.

B) Suspensión. Las AEF podrán suspenderse cuando se incumpla alguno de los requisitos y/o compromisos establecidos y necesarios para alcanzar los objetivos previstos en el proyecto de intervención familiar.

C) Cese. Las ayudas cesarán en las siguientes circunstancias:

-Cuando el o la menor cumpla los 18 años de edad (en su caso, se reducirá la ayuda conforme a las cantidades de la tabla del apartado 6.3).

-Cuando desaparezcan las circunstancias económicas y/o familiares que motivaron su concesión.

-En caso de incumplimiento reiterado de los requisitos y compromisos que supusieron su concesión; o si transcurridos dos meses desde su suspensión temporal no se valora favorablemente retomar el proyecto de intervención.

-Superar el tiempo máximo establecido de permanencia en el programa.

-No justificar en la forma establecida en el proyecto de intervención familiar los distintos conceptos cubiertos a través de la ayuda económica familiar.

-Falta de disponibilidad presupuestaria de la Delegación de Servicios Sociales.

Séptima. Criterios Adicionales de Concesión

1. La concesión de AEF responderá a la aplicación del baremo económico de referencia. Las ayudas que se propongan cuya cuantía supere la establecida en el baremo por considerarse necesarias, quedarán supeditadas a la disponibilidad de créditos una vez atendidas todas las AEF que se ajusten a dicho baremo.

2. Cuando no exista disponibilidad presupuestaria, se remitirá comunicación al efecto, se priorizarán los criterios de acceso a este tipo de ayudas conforme a lo establecido en la Orden de 10 de octubre de 2013 reguladora de estas ayudas (apartado 3.2), en cuanto a la valoración de las circunstancias familiares, atendiendo únicamente a las familias en las que se dé al menos una de las siguientes circunstancias:

-Familias numerosas.

-Familias monoparentales o con ausencia (por defunción, enfermedad, separación, etc.) de miembro clave para la manutención y/o cuidado de las personas menores.

-Familias con alguno/a de sus miembros con discapacidad igual o superior al 33 por ciento o en situación de dependencia.

-Familias con menores de reciente desinstitucionalización reintegrados/as a su familia de origen o en proceso de reunificación familiar a punto de ultimarse.

CAPÍTULO III

Ayudas de Emergencia Social

Octava. Definición

Según el Decreto 11/1992, de 28 de enero, son Ayudas de Emergencia Social aquellas prestaciones económicas individualizadas destinadas a paliar contingencias extraordinarias que puedan presentarse en personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez.

De este modo, se ha de considerar las Ayudas de Emergencia Social (AES) como una prestación económica no periódica de carácter extraordinario, transitorio y no habitual, con destino a apoyar a personas y familias con escasos recursos económicos que puedan verse afectadas por un estado de necesidad o con riesgo de exclusión social.

Estas ayudas tienen carácter finalista, por lo que deben destinarse únicamente al objeto que motivase su concesión. Además, la concesión tendrá como límite el importe del crédito presupuestario aprobado y por su naturaleza son ayudas de pago anticipado.

Novena. Objetivos

1º. Responder a situaciones urgentes producidas por necesidades ocasionales que afectan a los recursos o ingresos de personas o familias.

2º. Evitar la aparición de situaciones de marginación como consecuencia de imprevistos ocasionales o carencias económicas de emergencia, apoyando los procesos de intervención que se desarrollan desde equipos técnicos.

3º. Ofrecer herramientas para dar respuesta personas en situaciones de exclusión social o en riesgo de exclusión.

Décima. Personas Beneficiarias

Serán beneficiarias de estas ayudas las personas o unidades familiares de convivencia que se encuentren en situación de grave necesidad o extrema urgencia y en las que concurren las si-

güentes circunstancias:

- a) Residencia en el municipio de Córdoba.
- b) Insuficiencia de recursos económicos.
- c) Existencia de una grave necesidad o extrema urgencia.
- d) Demandantes de intervención en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la respectiva Zona de Trabajo Social y compromiso de aceptación de las prescripciones técnicas que se determinen.

A efectos de este tipo de ayudas, se considerarán Unidades Familiares las constituidas: por una sola persona; por dos o más que convivan en el mismo hogar, unidas por matrimonio u otra relación estable acreditada análoga a la conyugal; y/o unidas por adopción o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o por relación de amistad.

Undécima. Obligaciones de las Personas Beneficiarias

Son obligaciones de las personas beneficiarias de las Ayudas de Emergencia las siguientes:

a) Firmar y cumplir el acuerdo que, en su caso, se establezca por los Servicios Sociales Comunitarios, realizando las actividades que se fijen en el mismo.

b) Aplicar las ayudas recibidas a la finalidad para la que se concedieron.

c) Comunicar a los Servicios Sociales Comunitarios cualquier variación de las circunstancias personales, sociales, familiares o económicas que motivaron la concesión de la ayuda y pudieran dar lugar a su modificación o extinción.

d) Comparecer ante la Administración Pública y colaborar con la misma cuando sean requeridas por los Servicios Sociales Municipales.

e) Justificar la realización del gasto para el fin que motivó la concesión de la prestación económica; se acreditará con las facturas de los pagos y gastos realizados o cualquier otro documento con valor probatorio.

f) Reintegrar el importe de las cantidades indebidamente percibidas o no aplicadas al fin que motivó su concesión.

Duodécima. Requisitos de Concesión de las Ayudas de Emergencia

Podrán ser beneficiarias las Unidades Familiares o personas que reúnan los siguientes requisitos:

1. Empadronamiento y residencia en el municipio de Córdoba con una antigüedad de un año, salvo excepción justificada en el respectivo informe técnico del Centro.

2. Ausencia de medios económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y/o para afrontar los gastos derivados de una situación de emergencia (ver Base Tercera de este Programa sobre Criterios Económicos). A tales efectos se podrá descontar, si estuviese acreditado, los gastos de hipoteca o alquiler con un límite de 4.800 euros anuales.

3. No tener pendiente de justificación o reintegro, en su caso, prestaciones o ayudas concedidas con anterioridad.

4. Acreditar documentalmente la necesidad de la prestación.

5. Carecer de bienes muebles e inmuebles que no sean de primera necesidad cuya enajenación material pueda atender la necesidad propuesta.

Décima Tercera. Tipos de Ayudas

Las Ayudas de Emergencia Social podrán ser dinerarias o en especie. Aunque son de carácter único, podrá fraccionarse el pago total de la propuesta de AES; debiendo en todo caso el Ayuntamiento garantizar la disponibilidad económica para el periodo de tiempo en que se conceda la prestación.

Décima Cuarta. Conceptos y Cuantías

14.1. Grupos

Los conceptos objeto de AES se clasifican por grupos a los que puede aplicarse la prestación económica y responden al orden de preferencia que se expresa a continuación (sin perjuicio de las especialidades de los capítulos IV, V y VI del presente Programa):

GRUPO 1

A) Alojamiento/ hospedaje:

1. Alojamiento urgente y temporal a personas y/o familias que carezcan de él por situaciones de emergencias derivadas del abandono del hogar por incendio, orden judicial de desalojo por desahucio o ejecución hipotecaria, ruina, violencia o cualquier otra circunstancia similar.

2. Vivienda: Gastos necesarios para prevenir situaciones que pudieran derivar en un desalojo cierto.

3. Hospedaje temporal en situaciones de emergencia y/o urgencia.

B) Alimentación:

1. Alimentación.

2. Regímenes especiales de alimentación con prescripción médica de la Seguridad Social.

C) Suministros:

1. Suministro eléctrico.

2. Suministro de agua.

3. Suministro de gas o gasóleo.

GRUPO 2

A) Acondicionamiento de la vivienda:

1. Adaptación mínima siempre y cuando la vivienda sea propiedad o cedida en uso a favor de la persona destinataria de la ayuda económica.

2. Enseres y electrodomésticos de primera necesidad (termo de agua caliente, hornilla de cocina, lavadora básica, frigorífico básico, estufa, cama o somier, colchón, almohada, ropa básica de casa, mesa, silla, etc.).

B) Farmacia /ortopedia:

1. Gastos de medicamentos con prescripción médica de la Seguridad Social que no pueda asumir la persona interesada de forma puntual.

2. Prótesis, ortesis, ortodoncia dental, gafas, plantillas, calzado especial, audífonos, etc.) en los siguientes supuestos:

-Gastos causados por este concepto afecten a la cobertura de necesidades básicas.

-Dichos conceptos se encuentren excluidos de las prestaciones normalizadas gestionadas por los respectivos Organismos competentes.

-Reúnan las características de urgentes y necesarias, debiendo justificarse las consecuencias que se producirían de no adoptarse la medida.

GRUPO 3

Conceptos excepcionales. Cualquier otra situación de extrema necesidad que precise urgente solución, previamente justificada en informe técnico de los Servicios Sociales Comunitarios.

14.2. Conceptos excluidos de estas ayudas

No son objeto de cobertura por las ayudas de emergencia:

1. Pago de cuotas comunitarias de la Junta de Propietarios/as.

2. Pago de multas o sanciones de cualquier índole y naturaleza.

3. Pago de impuestos o tributos de Administraciones Públicas y deudas con la Seguridad Social.

4. Pago de mobiliario y electrodomésticos no básicos.

14.3. Importe de las ayudas de emergencia social

El límite económico máximo para cada grupo de AES se establece en:

Grupo 1:

- Alojamiento urgente: 1.000 €
- Hospedaje: 1.000 €
- Vivienda: 1.000 €
- Alimentación: 500 €
- Suministros (agua, luz, gas): 300 €
- Grupo 2:
 - Acondicionamiento de vivienda: 600 €
 - Enseres y electrodomésticos básicos: 500 €
 - Farmacia /ortopedia: 300 €
- Grupo 3:
 - Otros: 500 €

El importe total máximo en la suma de conceptos para una propuesta de ayuda de emergencia social no podrá superar los 1.000 euros. Excepcionalmente y suficientemente justificado y acreditado, podrá superarse esa cantidad, dentro de los límites de gasto inherentes a la Delegación de Servicios Sociales.

Décima Quinta. Periodicidad

Las Ayudas de Emergencia Social se podrán conceder una vez al año por unidad familiar. Excepcionalmente, la propuesta técnica podrá incluir, de acuerdo con la valoración de la situación y debidamente justificado mediante informe social al efecto, la concesión de más de una ayuda anual y/o por cuantías superiores a las establecidas.

Décima Sexta. Procedimiento Específico para las Ayudas de Emergencia

A) Inicio. Teniendo en cuenta que se trata de una prestación complementaria de carácter urgente o coyuntural, el acceso a este tipo de prestación será mediante solicitud, previa cita con el Trabajador Social de la zona de residencia, y estará sujeto a valoración y diagnóstico por parte del personal de Trabajo Social del respectivo Centro de Servicios Sociales Comunitarios.

Las necesidades deben ser valoradas como coyunturales y provocadas por la carencia de recursos económicos suficientes, que de no ser atendidas afectarían negativamente a las condiciones de vida de las unidades familiares.

B) Preferencia. Las ayudas económicas se atenderán por orden de prioridad en función de su clasificación en los grupos 1, 2 y 3 del apartado 14; siempre dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de Servicios Sociales Municipales.

Se priorizarán las AES destinadas a unidades familiares o personas que no hubieran sido beneficiarias de esta prestación con anterioridad.

C) Disponibilidad presupuestaria. Las personas responsables de las propuestas han de confirmar la disponibilidad presupuestaria; información que será suministrada por la Unidad de Gestión de Recursos a las Direcciones de cada Zona de Trabajo Social.

D) Tramitación. El resto del procedimiento se ajustará al previsto en la Base Sexta del capítulo II, relativo a las ayudas económicas familiares.

E) Justificación. Los beneficiarios de las ayudas, deberán justificar, en el plazo de dos meses desde la percepción de la ayuda, la realidad del gasto mediante factura original o documento de valor probatorio equivalente, ante el Trabajador social de su Centro de Servicios Sociales Comunitarios, para la elaboración la cuenta justificativa simplificada, o bien, para la tramitación del pago del gasto incurrido mediante documento de endoso.

La cuenta justificativa, contendrá una relación clasificada de los gastos incurridos con indicación del acreedor, del documento, su importe, fecha de emisión, y en su caso, fecha de pago.

El servicio gestor tramitará la justificación de las ayudas ante el órgano concedente, para su aprobación. Dicha justificación se realizará de manera periódica, y en todo caso, una vez finalizado

el plazo de vigencia de las ayudas deberán quedar acreditado ante el referido órgano, el destino dado a los fondos por cada una de las ayudas concedidas.

CAPÍTULO IV

Ayudas para el suministro de Agua

Décima Séptima. Objeto y Personas Beneficiarias

Las ayudas económicas de emergencia social para el pago de suministro de agua (EMACSA) se enmarcan en la tipología de ayudas de Emergencia Social reguladas en el Capítulo III del Programa, con las particularidades recogidas en este capítulo IV.

Serán beneficiarias de estas ayudas las personas o las unidades familiares de convivencia (definidas como tales unidades en la Base Décima del Programa) que se encuentren en situación de grave necesidad o extrema urgencia y que cumplan los siguientes requisitos:

- Residencia en el término municipal.
- Insuficiencia de recursos económicos.
- Existencia de una grave necesidad o extrema urgencia.
- Demandantes de intervención por parte de los Servicios Sociales Comunitarios en su Zona de Trabajo Social y compromiso de aceptación de las prescripciones técnicas establecidas por el profesional de referencia.

Décima Octava. Procedimiento

A) Inicio. Como el resto de ayudas de emergencia, el acceso será previa cita con el Trabajador Social de zona y posterior solicitud, a la que se acompañará factura original emitida por la empresa suministradora comprensiva de la deuda, y estará sujeto a valoración y diagnóstico por parte del personal de Trabajo Social del Centro de Servicios Sociales correspondiente. Las necesidades deben ser valoradas como coyunturales y provocadas por la carencia de recursos económicos suficientes, que de no ser atendidas afectarían negativamente a las condiciones de vida de las unidades familiares.

B) Solicitud de reducción. Junto con la ayuda económica se tramitará, en su caso, la solicitud a EMACSA de reducción o bonificación de factura, prevista en la Resolución de 15/12/2014 (BOJA 16/01/2015), modificada por Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas de suministro de agua potable del municipio de Córdoba (BOJA 22/11/2016); o en posteriores disposiciones que modifiquen o sustituyesen a las citadas. Pueden beneficiarse de estas reducciones:

-Familias numerosas en posesión del correspondiente título de familia numerosa, que tengan un único suministro a su nombre siendo éste el domicilio habitual y que se encuentren al corriente de pago del suministro.

-Personas jubiladas o pensionistas del sistema público de pensiones, siempre que: la unidad familiar que constituyan no supere unos ingresos anuales equivalentes a 1,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM); tengan un único suministro a su nombre en el domicilio habitual; se encuentren al corriente de pago del suministro.

-Familias con todos sus miembros en situación de desempleo; que tengan un único suministro a su nombre siendo éste el domicilio habitual; que estén al corriente de pago del suministro y los ingresos anuales de la unidad familiar no superen 1,5 veces el IPREM. Se entenderá por situación de desempleo no tener la condición de pensionista y no realizar actividad laboral alguna por cuenta propia o ajena, o bien ser beneficiarios/as del Plan estatal PREPARA.

-Familias con riesgo de exclusión social que cumplan las condi-

ciones:

Empadronamiento y residencia en el municipio con antigüedad de seis meses;

Facturación de suministro referido a vivienda habitual;

Ausencia de medios económicos para subsistencia, a cuyo efecto el importe máximo de ingresos de la unidad familiar sería el IPREM (537,84 €) si hay 1 miembro, incrementado en 10% por cada miembro mayor de edad (+53,78 €) y en 20% por cada miembro menor de edad (+107,56);

No tener pendiente de justificar ayudas o bonificaciones anteriormente concedidas, no ser titular de otros muebles o inmuebles cuya enajenación pueda atender esas necesidades básicas y estar todas personas en edad laboral de la unidad familiar inscritas como demandantes de empleo con antigüedad de 6 meses o más.

En caso excepcional justificado en informe técnico de Servicios Sociales Comunitarios, podrán incumplirse uno o más de los anteriores requisitos relativos a riesgo de exclusión social.

C) Importe de las ayudas. La Ayuda para el pago de suministro de agua será por el importe total de la deuda, sin que pueda superar los 300 € (ver Grupo 1, quinto guión) salvo situación justificada expresamente en el informe social.

D) Disponibilidad presupuestaria. Una vez agotada la partida presupuestaria para la anualidad correspondiente, se remitirá comunicación al efecto y se podrá reanudar la tramitación de ayudas por este capítulo a principios del siguiente ejercicio.

E) Justificación. Los beneficiarios de las ayudas, una vez recibida la factura de la empresa suministradora, a la mayor brevedad, solicitarán cita por el procedimiento de urgencia con el personal de Trabajo Social de zona, para la solicitud de la ayuda de emergencia social, debiendo acompañar a la solicitud factura original de la empresa suministradora donde conste el importe de la deuda.

En el momento de la solicitud, el solicitante firmará documento de endoso para el abono de la deuda con el importe de la ayuda, para la tramitación del pago correspondiente a dicha factura.

CAPÍTULO V

Ayudas para a bono de las deudas de suministro eléctrico

Décima Novena. Objeto y Procedimiento

El objeto de este tipo de ayudas de emergencia es aplazar el corte de suministros de energía eléctrica (ENDESA y otras empresas comercializadoras de suministro eléctrico) hasta que se conceda la ayuda en tramitación para el pago de la deuda, en caso que sea procedente tras la valoración de las circunstancias familiares. Deberá haberse solicitado el bono social (ver Base vigésima).

Se arbitra el siguiente procedimiento:

A) Propuesta de ayuda. La persona solicitante deberá justificar el pago de los últimos recibos que haya abonado junto con el o los justificantes de la deuda y aviso de corte. La propuesta de Ayuda de Emergencia se realizará por el importe íntegro de la deuda, que excepcionalmente –motivándose en el informe técnico– podrá alcanzar el importe máximo de 600 €; sin perjuicio del límite total a que se refiere la Base 14ª siempre que se justifique debidamente en el informe social. En todo caso, cuando la ayuda no fuera suficiente para satisfacer la deuda con la empresa comercializadora de energía, la persona usuaria deberá acordar con esta el fraccionamiento de pago de la forma más idónea para la satisfacción de la deuda pendiente con la empresa de suministro.

B) Solicitud de aplazamiento. Desde la Dirección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios se remitirá un correo electrónico (o comunicación de eficacia similar) solicitando el aplazamiento

del corte de suministro hasta que se abone la deuda pendiente, por encontrarse en trámite la concesión de una ayuda de emergencia social. (2)

En el correo electrónico se ha de indicar que se encuentra en trámite una Ayuda de Emergencia Social a nombre de D./Dª. _____, por importe de _____ €, como titular del suministro afectado (número de referencia de la factura); solicitándose el aplazamiento de corte de suministro eléctrico hasta que se produzca el pago de _____ € a la comercializadora X (como endosataria de la ayuda) por parte del Ayuntamiento.

C) Importe. El importe total de la ayuda a conceder se computará dentro del total anual de AES para cada unidad familiar.

D) Datos bancarios. Los datos bancarios serán los indicados para cada empresa de suministro eléctrico para el ingreso de la ayuda. (3)

E) Documentación. El expediente completo se remitirá a la Unidad de Gestión de Recursos de Servicios Sociales Centrales.

F) Justificación. Los beneficiarios de las ayudas, una vez recibida la factura de la empresa suministradora, a la mayor brevedad, solicitarán cita por el procedimiento de urgencia con el personal de Trabajo Social de zona, para la solicitud de la ayuda de emergencia social, debiendo acompañar a la solicitud factura original de la empresa suministradora donde conste el importe de la deuda.

En el momento de la solicitud, y con el objeto de hacer efectiva la ayuda, el solicitante deberá cumplimentar y firmar documento de endoso para el abono de la deuda con el importe de la ayuda, para la tramitación del pago correspondiente a dicha factura.

Vigésima. Bono Social

El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, regula el bono social como descuento en la factura de energía eléctrica aplicable a personas consumidoras vulnerables (-25%) y vulnerables severas (-40%), distinción basada en el umbral de renta. Como requisito indispensable para la tramitación de la ayuda de emergencia que cubra una deuda por este concepto, deberá exigirse -cuando se reúnan las condiciones para ello- la renovación del antiguo bono social antes del 10/04/2018 (si fueran beneficiarias del antiguo bono social) o la solicitud del nuevo bono social; en ambos casos con arreglo al procedimiento descrito en la Orden de 6/10/2017 (Orden ETU/943/2017), de desarrollo del Real Decreto 897/2017. Ello sin perjuicio de posteriores normas que las modifiquen.

Será imprescindible que la persona beneficiaria tramite la solicitud de Bono Social para todas las propuestas que reúnan alguno de los siguientes requisitos de persona consumidora vulnerable:

a) Renta individual o de la unidad familiar no supere: 1,5 IPREM (14 pagas), si no hay menores; 2 IPREM si hay 1 menor; 2,5 IPREM si hay 2 menores. (4)

b) Título de familia numerosa.

c) Todas las personas miembros de la unidad familiar con ingresos sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros ingresos.

Cuando, cumpliendo los requisitos anteriores, la unidad familiar tenga una renta anual inferior o igual al 50% de los umbrales establecidos en el apartado a), incrementados en su caso si se dan circunstancias especiales (discapacidad 33% o víctima de violencia de género o de terrorismo), la persona o unidad familiar será considerada consumidora vulnerable severa. Asimismo también tendrá la consideración de vulnerable severa si la renta anual es inferior o igual a una vez el IPREM -a 14 pagas-, si es el caso c (pensionista/s de cuantía mínima) o dos veces el IPREM

en el caso b (familia numerosa).

Todas esas circunstancias especiales deberán acreditarse por los Servicios Sociales Comunitarios según modelo de certificación de Anexo II. (5)

Un eventual convenio entre la Junta de Andalucía y ENDESA sustituiría al vigente y con la adhesión de los ayuntamientos, incluido el de Córdoba. En dicho convenio se regularía, además del bono social, la suspensión del corte de suministro por impago cuando se encuentre en tramitación la concesión de una AES a la persona afectada, al igual que en el vigente convenio pero con los nuevos plazos del Real Decreto 897/2017 (acreditación del pago de la deuda en cinco meses desde la emisión de factura).

CAPÍTULO VI

Ayudas al alquiler de vivienda

Vigésima Primera. Definición y Clases

Estas ayudas, que anteriormente se concedían por VIMCORSAS, cuentan con la colaboración de dicha empresa municipal en la gestión, con arreglo a un Programa de Ayudas que establece los criterios y procedimiento específicos. Las Ayudas al alquiler de vivienda son prestaciones económicas, normalmente de carácter periódico, destinadas a personas o unidades familiares en situación de exclusión y crisis habitacional. Las ayudas se destinan al alquiler mediante un contrato nuevo o para el mantenimiento de un contrato de arrendamiento ya existente.

Tales ayudas son compatibles con las que pueda conceder la Junta de Andalucía, siempre que no se supere el importe total del alquiler.

Vigésima Segunda. Procedimiento

Para lo no previsto en este apartado, rige el procedimiento establecido en el Programa de Ayudas al Alquiler.

A) Iniciación. Al igual que las ayudas de emergencia, se inicia con la previa cita y posterior solicitud a través de propuesta técnica, que por sus peculiaridades podrá ser: 1) del respectivo Centro de Servicios Sociales Comunitarios, cuando se trate de familias con dificultades para el pago de la renta de alquiler o que hayan dejado de abonarla sin que la propiedad haya interpuesto aún demanda; 2) de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, en el caso de familias que son objeto de procedimiento judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio con una orden de lanzamiento; 3) de los Equipos de Tratamiento Familiar, en su caso, cuando se trate de unidades familiares con menores en situación de riesgo o desprotección.

En el informe técnico se determinará la capacidad económica de la persona o unidad familiar solicitante y, en consecuencia, la cantidad que pueden destinar al abono del alquiler, así como la idoneidad para compartir con otras personas o familias una vivienda o la recomendación para ser adscrita a una vivienda tutelada por alguna entidad sin ánimo de lucro. Dicho informe se remitirá por correo electrónico (o medio de eficacia similar) a VIMCORSAS para que recabe el resto de la documentación pertinente.

En todo caso, el expediente individualizado de la persona o familia propuesta que por Servicios Sociales Municipales se ha de remitir a VIMCORSAS contendrá:

- Informe social firmado y documentos probatorios respectivos.
- Formulario de solicitud.
- Formulario de alta a terceros en aplicación contable SICAL-WIN.
- Copia del DNI/NIE.
- En el caso de ayuda para la continuidad del alquiler, contrato de arrendamiento.

B) Comunicación a VIMCORSAS. El respectivo CSSC o la OMDV enviarán escrito de remisión (registrado de salida), así co-

mo copia del expediente por correo ordinario a VIMCORSAS.

C) Propuesta. VIMCORSAS recabará la documentación restante y planteará el asunto a la Comisión de Valoración y Control Social instituida al efecto, que elaborará la propuesta de concesión.

D) Resolución. Las ayudas se conceden por Decreto de la Delegación de Servicios Sociales, salvo si excepcionalmente superasen los 6.000 €, en cuyo caso se acordarán por la Junta de Gobierno Local.

E) Notificación y pago. Corresponde a VIMCORSAS como entidad colaboradora, que adelantará en caso necesario el abono de las cantidades concedidas, así como recabará las justificaciones de las ayudas (recibos de alquiler y otros documentos).

Vigésima Tercera. Requisitos de las Personas Beneficiarias

1. Inscripción en padrón de habitantes con antelación mínima de seis meses respecto de la iniciación del procedimiento.

2. Personas o familias en situación de necesidad de emergencia habitacional, en el caso de ayudas para el alquiler, a causa de:

-Desahucio por impago de alquiler, ejecución hipotecaria y supuestos análogos derivando en riesgo o pérdida de la vivienda habitual sin alternativa habitacional.

-Malos tratos que justifiquen la necesidad de vivienda, especialmente en los casos de violencia de género y unidades de convivencia con menores.

-Carecer de vivienda habitual y/o alojamiento provisional en centros de acogida o en domicilios de familiares en situación de hacinamiento.

-Miembro de la unidad familiar con movilidad reducida en vivienda habitual que no reúne condiciones de accesibilidad.

-Situación de infravivienda.

3. Falta de medios económicos constatada en informe de Servicios Sociales Municipales, aplicando como límite máximo de renta para acceder al Programa:

1 persona: 1 IPREM

Unidad de convivencia de 2 personas: 1,5 IPREM

Unidad de convivencia de 3 personas: 1,7 IPREM

Unidad de convivencia de 4 personas: 1,9 IPREM

Unidad de convivencia de más de 4 personas: 2 IPREM

Excepcionalmente y de forma motivada, se podrán superar dichos límites cuando concurren causas extraordinarias que evidencien que la renta disponible de la unidad de convivencia se encuentra en los umbrales descritos, aun cuando sus ingresos formales sean superiores.

Vigésima Cuarta. Duración e Importe de las Ayudas

Las ayudas, tanto para nuevo contrato de arrendamiento de vivienda como para mantenimiento de uno ya existente, serán por un máximo de un año. El importe no será superior a 6.000 € (salvo que excepcionalmente se acuerde un importe mayor por la Junta de Gobierno Local). Se podrá incluir en el importe de ayuda la comisión de la agencia y la fianza, esta con el carácter de ayuda reintegrable.

Vigésima Quinta. Extinción, Reintegro y Modificación de la Ayuda

Además de por el transcurso del plazo para la que fue concedida, la ayuda para el alquiler se extinguirá por las siguientes causas:

a) Impago de la parte de la renta a que viene obligada la beneficiaria.

b) Mejora significativa en las condiciones que justificaron la concesión de la misma.

c) Incumplimiento del deber de aportar la documentación sobre el cambio de circunstancias en el plazo de 15 días desde que és-

tas se produzcan.

d) Incumplimiento del compromiso social o de otras obligaciones establecidas.

e) No aportar la documentación requerida.

f) Rehusar la notificación de la resolución de la ayuda.

g) Comprobación de no veracidad de los datos que justificaron la ayuda.

La extinción de la ayuda se realizará mediante resolución motivada, previo conocimiento e informe de la Comisión. Si de dicho procedimiento se concluyera la existencia de indicios de percepción indebida, el Ayuntamiento de Córdoba incoaría el oportuno expediente de reintegro (al margen del reintegro de la fianza que deba efectuarse).

En el supuesto b (mejora de las condiciones que justificaron la concesión), la Comisión de Valoración y Control Social valorará las nuevas circunstancias para determinar la extinción de la ayuda o la modificación de la misma adecuándola a la nueva realidad.

Córdoba, 15 de mayo de 2018

(1) Criterio fijado por el apartado 3.3 del Protocolo de Actuación anejo a la Orden de 10/10/2013, reguladora de las Ayudas Económicas Familiares.

(2) Como ejemplo, la dirección de correo de Endesa (a salvo de

su modificación), es: marta.diaz@endesa.es

(3) Estos datos bancarios, según se trate de Endesa XXI o Endesa Energía, serán (salvo variación):

-ENDESA XXI: ES57 0049 1500 0121 1017 9382.

-ENDESA ENERGÍA: ES31 2038 0624 1160 0009 4625.

(4) Los multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas establecidos en el apartado a) se incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concorra alguna de las siguientes circunstancias especiales: 1) La persona consumidora o alguna de las pertenecientes a la unidad familiar tengan discapacidad reconocida igual o superior al 33%; 2) Alguna de ellas acredite situación de violencia de género, conforme a la legislación vigente; 3) Condición de víctima de terrorismo, según legislación vigente.

(5) Para el caso de ENDESA, la información sobre la tramitación del bono social se encuentra en www.endesaclientes.com/bono-social. Además, en el siguiente enlace se puede encontrar información sobre Eficiencia Energética en hogares: www.Twerergy.com: información que se hará llegar a la persona usuaria.

Córdoba, 13 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, José Alberto Alcántara Leonés.

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Zona de Trabajo Social

Don /Doña.

DNI (con letra)/NIE

Domicilio/a en Córdoba,

Nº de menores

 Ayuda de Emergencia SocialGRUPO 1: Alojamiento Urgente Hospedaje Vivienda Alimentación SuministrosGRUPO 2: Acondic. Vivienda Enseres y Electrodomésticos Básicos Farmacia / OrtopediaGRUPO 3: Otros Ayuda de carácter excepcional Ayuda Económica Familiar Ayuda para alquiler de vivienda

AUTORIZA a estos efectos para que se recaben los documentos necesarios que se conserven en la Administración Pública; igualmente, autoriza a ceder sus datos al único efecto de realizar las gestiones necesarias para la tramitación de la solicitud de ayuda.

DATOS BANCARIOS (PARA EL CASO DE CONCESIÓN DE LA AYUDA):

A) ABONO DIRECTO

Solicitante titular de la cuenta, D./Dña _____				
Documento de identidad: NIF/NIE: _____				
Código IBAN:				

B) ENDOSO

Autorizo: 1) la gestión para la continuidad del servicio y su abono en el supuesto de ayuda de emergencia para suministros (luz, agua o gas); 2) a que la ayuda, en caso de ser concedida, sea ingresada a favor de: D./Dña/entidad: _____				
Documento de identidad: NIF - CIF - NIE: _____				
Código IBAN:				

Fecha

Firma:

ANEXO II

INFORME ACREDITATIVO DE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
PARA SOLICITARSE EL BONO SOCIAL

Titular del contrato de suministro eléctrico_____.

Por el presente documento se deja constancia, exclusivamente a los efectos de la acreditación prevista para la aplicación del bono social en la factura eléctrica:

1. Que la persona que se cita, titular del contrato, o alguna de las que pertenecen a su unidad familiar, se encuentra o encuentran en una de las circunstancias especiales especificadas en el artículo 3, apartado 3, del R. Decreto 897/2017, de 6 de octubre, que regula la figura de la persona consumidora vulnerable, el bono social y otras medidas de protección en el ámbito del consumo doméstico de energía eléctrica.*
2. Que estas circunstancias han sido acreditadas de conformidad con el artículo 3 de la Orden de 6/10/2017, por la que se desarrolla el mencionado R. Decreto 897/2017.

En Córdoba, a de de 20

Trabajador/a Social,

Firmado:
(sello)

* Dice dicho artículo 3.3: Los multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas establecidos en el apartado 2.a) se incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias especiales:

- a) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
- b) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar acredite la situación de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
- c) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Anexo III

CUENTA JUSTIFICADA SIMPLIFICADA

ASUNTO: INFORME QUE EMITE EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL DE ZONA RESPECTO DE LA JUSTIFICACIÓN DEL EMPLEO DADO A LA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL CONCEDIDA A D/DOÑA_____

PRIMERO: Mediante Decreto del Concejal Delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad n.º _____ de fecha _____, se aprobó la concesión de una ayuda de emergencia social a D/Doña _____ por importe de _____ € para gastos de alimentación.

SEGUNDO: Que en fecha _____ se procedió al abono de la ayuda, mediante ingreso en la cuenta facilitada por la persona interesada o, en su caso, en la cuenta del endosatario.

TERCERO: Que dentro del plazo concedido para la justificación, la persona interesada presenta facturas y/o documentos de valor probatorio equivalente, justificativo del empleo dado a los fondos recibidos, con arreglo al siguiente desglose:

N.º Factura/Ticket	Emisor	Concepto	Fecha emisión	Importe

CUARTO: A la vista de los documentos presentados cabe apreciar acreditado el cumplimiento de los fines así como el empleo dado a los fondos para los que se concedió la ayuda.

Córdoba a ____ de _____ de 201__

El/La Técnico/a del Centro de Servicios Comunitarios de _____

Núm. 2.107/2018

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2018, se adoptaron los acuerdos que a continuación se detallan de aprobación inicial de modificaciones de crédito del Presupuesto del año 2018.

Habiendo transcurrido el plazo establecido, comprendido entre los días 24 de mayo de 2018 y 13 de junio de 2018, ambos inclusive; no se ha presentado reclamación alguna contra los mismos, elevándose a definitivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 179.4 en relación con el 169 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, el siguiente:

Acuerdo nº 93/18

Primero: Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria en el Presupuesto del año 2018 mediante la concesión de un suplemento de crédito por importe de 6.088,33 € en las aplicaciones que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

Código	Aplicación presupuestaria	Importe(€)
Z A01 1320 12100 0	Policía Local. Funcionarios Compl. Destino	2.106,80 €
Z A01 1320 12101 0	Policía Local. Funcionarios Compl. Especif.	1.849,52 €
Z A01 1320 15000 0	Policía Local. Productividad Funcionarios	792,68 €
Z A01 1320 16000 0	Policía Local. Seguridad Social	1.339,33 €
	Total	6.088,33 €

RECURSOS:

Concepto	Importe (€)
BAJA EN LA APLICACIÓN Z H34 9200 13101 0	4.749,00 €
BAJA EN LA APLICACIÓN Z H34 9200 16000 0	1.339,33 €
Total	6.088,33 €

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas

Fuentes de Financiación	Descripción Beneficiario	Objetivo/Fines	Coste	Plazo de Ejecución
Z E10 2314 48911 P	Proyecto Hombre V14357230	Atención urgente a personas en alto riesgo de exclusión social: drogodependientes, sida, inmigrantes. Con el ofrecimiento de un recurso habitacional	15.000,00 €	2018
Z E10 2314 48917 P	Cruz Roja G2866001G	Proyecto Alimentos para la Solidaridad	12.000,00 €	2018

Debe decir:

Fuentes de Financiación	Descripción Beneficiario	Objetivo/Fines	Coste	Plazo de Ejecución
Z E10 2314 48911 P	Proyecto Hombre V14357230	Atención urgente a personas en alto riesgo de exclusión social: drogodependientes, sida, inmigrantes. Con el ofrecimiento de un recurso habitacional	30.000,00 €	2017 y 2018
Z E10 2314 48917 P	Cruz Roja G2866001G	Proyecto Alimentos para la Solidaridad	24.000,00 €	2018

Que la modificación de la Base de Ejecución 67 ha de someterse a los mismos trámites que la aprobación inicial del presupuesto y, en concreto, seguirá las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 del RD Legislativo 2/2004.

Acuerdo nº 97/18

Primero: Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria en el Presupuesto del año 2018 mediante la concesión de un suplemento de crédito por importe de 39.533,16 € en las aplicaciones

sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para la aprobación de los presupuestos, según determina el artículo 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del RD 500/90, considerándose definitivamente aprobado de no existir reclamaciones.

Acuerdo nº 94/18

Primero: Aprobar una transferencia de créditos de acuerdo con el siguiente detalle:

Transferencias Negativas:

Código	Aplicación presupuestaria	Importe (€)
Z E11 2311 22706 0	Prev.Insercion Prog. Infancia y Familia. Trab. Técnicos	27.000 €
	Total Transferencias Negativas	27.000 €

Transferencias Positivas:

Código	Aplicación presupuestaria	Importe(€)
Z E10 2314 48911 P	Coop. Social Act.Integ.Personas Aband.Soc. Proyecto Hombre.	15.000 €
Z E10 2314 48917 P	Coop. Social Alimentos Cruz Roja	12.000 €
	Total Transferencias Positivas	27.000 €

Segundo: Someter la tramitación del expediente a los mismos requisitos de información, reclamaciones, recursos y publicidad que se establecen para la aprobación de los presupuestos, atendiendo a lo regulado en el artículo 179.4 del RD Legislativo 2/2004 y 42 del RD 500/90.

Tercero: Modificar la Base 67 de las de Ejecución del Presupuesto que recoge el Plan Estratégico de Subvenciones previsto para el año 2018, en la Tabla correspondiente a "Servicios Sociales" y en lo que afecta a las siguientes subvenciones nominativas y en los siguientes términos:

Donde dice:

que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

Código	Aplicación presupuestaria	Importe(€)
Z F40 9200 12009 0	Parque Móvil. Básicas Funcionarios	8.547,18 €
Z F40 9200 12100 0	Parque Móvil. Funcionarios Compl. Destino	4.676,42 €
Z F40 9200 12101 0	Parque Móvil. Funcionarios Compl. Especif.	11.884,21 €
Z F40 9200 15000 0	Parque Móvil. Productividad Funcionarios	5.093,23 €
Z F40 9200 16000 0	Parque Móvil. Seguridad Social	9.332,12 €

Total	39.533,16 €
RECURSOS:	
Concepto	Importe (€)
Baja en la Aplicación Z H34 9200 13101 0	30.201,04 €
Baja en la Aplicación Z H34 9200 16000 0	9.332,12 €
Total	39.533,16 €

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para la aprobación de los presupuestos, según determina el artículo 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del RD 500/90, considerándose definitivamente aprobado de no existir reclamaciones.

Acuerdo nº 98/18

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de crédito del Presupuesto del año 2018 mediante la concesión de un crédito extraordinario por importe de 75.987,27 euros en las aplicaciones que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

Aplicación	Denominación	Importe
Z E10 2310 62501 0	Equip. Cocina FOGGARA (2018/2/FOGG/231)	75.987,27 €
	Total	75.987,27 €

RECURSOS:

Concepto	Importe
BAJA EN APLICACIÓN Z E11 2313 62500 0 (2005/2/SER/313)	2.749,96 €
BAJA EN APLICACIÓN Z E10 2310 62501 0 (2008/2/SERVS/313)	6.053,95 €
BAJA EN APLICACIÓN Z E10 2310 62501 0 (2009/2/EQCSS/313)	32.979,45 €
BAJA EN APLICACIÓN Z E10 2310 62500 0 (2005/2/CAC/313)	5.964,24 €
BAJA EN APLICACIÓN Z E10 2310 63200 0 (2009/2/SERVS/313)	26.513,01 €
BAJA EN APLICACIÓN Z E10 2310 62600 0 (2009/2/SERVS/313)	1.726,66 €
Total	75.987,27 €

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para la aprobación de los presupuestos, según determina el artículo 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del RD 500/90, considerándose definitivamente aprobado de no existir reclamaciones.

Acuerdo nº 99/18

Primero: Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria en el Presupuesto del año 2018 mediante la concesión de un suplemento de crédito por importe de 115.497,36 € en las aplicaciones que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

Código	Aplicación presupuestaria	Importe(€)
Z C43 3321 12009 0	Biblioteca. Básicas Funcionarios	1.839,14 €
Z C43 3321 12100 0	Biblioteca. Funcionarios Compl. Destino	937,00 €
Z C43 3321 12101 0	Biblioteca. Funcionarios Compl. Especif.	2.471,48 €
Z C43 3321 15000 0	Biblioteca. Productividad Funcionarios	1.059,18 €
Z C43 3321 16000 0	Biblioteca. Seguridad Social	2.086,15 €
Z E10 2310 12009 0	Servicios Sociales. Básicas Funcionarios	18.173,96 €
Z E10 2310 12100 0	Servicios Sociales. Compl. Destino Func.	8.094,12 €
Z E10 2310 12101 0	Servicios Sociales. Compl. Especif. Func.	23.273,44 €

Z E10 2310 15000 0	Servicios Sociales. Productividad Func.	9.974,32 €
Z E10 2310 16000 0	Servicios Sociales. Seguridad Social	17.279,00 €
Z H30 9205 12009 0	RRHH. Personal. Rel. Lab. Basicas Func.	6.062,70 €
Z H30 9205 12100 0	RRHH. Personal. Rel. Lab. Compl. Dest. Func.	2.653,68 €
Z H30 9205 12101 0	RRHH. Personal. Rel. Lab. Compl. Espec. Func.	7.629,75 €
Z H30 9205 15000 0	RRHH. Personal. Rel. Lab. Productiv. Func.	3.269,88 €
Z H30 9205 16000 0	RRHH. Personal. Rel. Lab. Seguridad Social	10.693,56 €
Total		115.497,36 €

RECURSOS:

Concepto	Importe
BAJA EN LA APLICACIÓN Z H34 9200 13101 0	85.438,65 €
BAJA EN LA APLICACIÓN Z H34 9200 16000 0	30.058,71 €
Total	115.497,36 €

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para la aprobación de los presupuestos, según determina el artículo 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del RD 500/90, considerándose definitivamente aprobado de no existir reclamaciones.

Acuerdo nº 100/18

Primero: Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria en el Presupuesto del año 2018 mediante la concesión de un suplemento de crédito por importe de 117.299,42 euros en las aplicaciones que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

Código	Aplicación presupuestaria	Importe(€)
Z A14 9202 12009 0	Servicio Contenc. Básicas Func.	24.222,51 €
Z A14 9202 12100 0	Servicio Contenc. Compl. Dest. Func.	16.049,37 €
Z A14 9202 12101 0	Servicio Contenc. Compl. Especif. Func.	38.119,08 €
Z A14 9202 15000 0	Servicio Contenc. Productividad	16.336,74 €
Z A14 9202 16000 0	Servicio Contenc. Seguridad Social	22.571,72 €
Total		117.299,42 €

RECURSOS:

BAJA EN LAS APLICACIONES:		
Z H34 9200 13101 0	Personal Eventual. Bolsa de Trabajo	-94.727,70 €
Z H34 9200 16000 0	Personal Eventual. Seg. Social Bolsa Trab.	-22.571,72 €
Total		-117.299,42 €

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para la aprobación de los presupuestos, según determina el artículo 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del RD 500/90, considerándose definitivamente aprobado de no existir reclamaciones, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad atendiendo a la situación de la Asesoría Jurídica.

Acuerdo nº 101/18

Primero: Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria en el Presupuesto del año 2018 mediante la concesión de un suplemento de crédito por importe de 87.232,67€ en las aplicaciones que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

C.T	Org	Prog.	Eco.	P..	Proyecto	Descripción Aplicación	Importe
Z	B35	4320	74000	0	2016/2/TRUEQ/432/1	VIMCORSÁ	87.232,67€
Total							87.232,67€

RECURSOS:

C.T	Org	Prog.	Eco.	P..	Proyecto	Descripción Aplicación	Importe
Z	C30	4320	62500	0	2010/2/TURIS/432/1	Turismo Equipamiento	87.232,67€
Total							87.232,67€

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para la aprobación de los presupuestos, según determina el artículo 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del RD 500/90, considerándose definitivamente aprobado de no existir reclamaciones.

Acuerdo nº 102/18

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de crédito del Presupuesto del año 2018 mediante la concesión de un crédito extraordinario por importe de 34.800,00 euros en las aplicaciones que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

Aplicación	Denominación	Importe
Z A13 3340 78900 0	Subv. Cong. Esclavas Rest. Torre Alminar (R2801794E)	34.800,00 €
Total		34.800,00 €

RECURSOS:

Fuentes de Financiación	Descripción Beneficiario	Objetivo/Fines	Coste	Plazo de Ejecución
Z A13 3340 75300 0	Subvención a la Universidad de Córdoba Q141800113	Convenio para la restauración de la Torre Alminar de San Juan de los Caballeros	34.800,00 €	2018

Incluir la fila:

Fuentes de Financiación	Descripción Beneficiario	Objetivo/Fines	Coste	Plazo de Ejecución
Z A13 3340 78900 0	Subvención Congregación Esclavas S.C. Jesús (CIF R2801794E)	Subvención a la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús para la restauración de la Torre Alminar de San Juan de los Caballeros. Pago anticipado (*)	34.800,00 €	2018

“(*) Por razones de urgencia en la intervención, motivado en el interés público de la conservación del patrimonio, la subvención correspondiente a la restauración de la Torre Alminar de S. Juan de los Caballeros será de pago anticipado.”

Que la modificación de la Base de Ejecución 67 ha de someterse a los mismos trámites que la aprobación inicial del presupuesto y, en concreto, seguirá las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 del RD Legislativo 2/2004.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 171.1 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra el anterior

Acuerdo los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y ello sin perjuicio de que puede ejecutar cualquier acción que se considere conveniente.

Córdoba, a 15 de junio de 2018. Firma electrónica de la Teniente de Alcalde-Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda,

Salud y Consumo y Vivienda, Alba M^a Doblas Miranda (Decreto Núm. 8403/16, de 3 de octubre). V^oB^o Firma electrónica del Secretario General del Pleno, Valeriano Lavela Pérez.

Ayuntamiento de Hornachuelos

Núm. 1.995/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente el "Plan Estratégico para la Recuperación del Casco Antiguo", lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Hornachuelos, 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 1.997/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente la "Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles", lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo y, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Hornachuelos, a 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 1.998/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente la "Ordenanza Fiscal de ciertos Servicios Municipales", lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo y, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Hornachuelos, a 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 1.999/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente la "Ordenanza Fiscal Re-

guladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana", lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo y, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Hornachuelos, 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 2.000/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente la "Ordenanza municipal reguladora de la prestación económica por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable, prevista en los artículos 42.5.D)b) y 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía", lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo y, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Hornachuelos, a 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 2.001/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente la "Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación de actividades formativas organizadas por el Ayuntamiento de Hornachuelos", lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo y, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Hornachuelos, a 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 2.002/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente la "Ordenanza Municipal Reguladora del aparcamiento y estancia de autocaravanas y caravanas", lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta

días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo y, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Hornachuelos, a 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 2.003/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente la "Ordenanza Reguladora Municipal por aprovechamiento de las aguas subterráneas en el pozo de Calle El Quejigo", lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo y, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Hornachuelos, a 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 2.007/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2018, se aprobaron inicialmente las modificaciones introducidas en la "Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del Dominio Público Local", lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo y, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Hornachuelos, a 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 2.008/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2018, se aprobaron inicialmente las modificaciones introducidas en la "Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la prestación de servicios en la piscina e instalaciones deportivas", lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo y, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Hornachuelos, 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 2.009/2018

Mediante acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente el estudio de viabilidad previo del contrato mixto de concesión del servicio de Residencia de Mayores "San Bernardo" y concesión de obras de ampliación de la misma, lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de un mes para que puedan realizar las alegaciones que tengan por conveniente, que serán resueltas por el Pleno de la Corporación.

Hornachuelos, 8 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por la Alcaldesa, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Ayuntamiento de Iznájar

Núm. 2.110/2018

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL "IZNÁJAR EMPRENDE" DURANTE EL EJERCICIO 2018.

BDNS (Identif.) 403790

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (<http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index>):

Primero. Beneficiarios:

Personas físicas empadronadas en Iznájar con una antigüedad mínima de un año en el momento del alta en el RETA o en aquel que legalmente le sustituya.

Personas jurídicas que tengan su domicilio fiscal y desarrolle y establezca su actividad en el municipio de Iznájar.

Personas físicas menores de 35 años empadronadas en la vivienda objeto de alquiler.

En todos los casos no haber sido beneficiario para los mismos conceptos de ayuda de cualquier otra Administración Pública en el período de referencia.

Segundo. Finalidad:

Medidas de apoyo a la actividad emprendedora, fomento del empleo a favor de las actividades económicas, empresas y comercios de Iznájar y fomento del alquiler para jóvenes.

Tercero. Bases reguladoras:

<https://www.iznajar.es/noticia/subvenciones-municipales-2018?mlid=#udadano/noticias>

Cuarto. Importe:

Medida 1.A: hasta 1.750,00 € + 250,00 € para emprendedores menores de 30 años.

Medida 1.B: hasta 1.500,00 € + 250,00 € para emprendedores menores de 30 años.

Medida 1.C: hasta 500,00 € por contrato realizado con un máximo de dos contratos.

Medida 2.A: 50% del importe satisfecho por tasas municipales para la obtención de la licencia municipal de actividad.

Medida 2.B: 40% de los costes de participación por alquiler de stand para la participación en ferias y eventos de promoción y difusión, con un máximo de 600,00 €.

Medida 2.C: 40% de los intereses satisfechos por razones de operaciones financieras con un máximo de 1.000,00 €.

Medida 3.A: Hasta un 25% del presupuesto total de obras de rehabilitación y/o reforma de viviendas o locales situados en el núcleo principal de Iznájar para destinarlas a actividades turísticas o de restauración, con un límite de 3.000,00 €.

Medida 4.A: Hasta un 65% del alquiler de viviendas a los jóvenes entre 18 y 35 años.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes:

Hasta el 15 de noviembre de 2018.

Iznájar, 14 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Iznájar, Lope Ruiz López.

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Núm. 2.111/2018

Convocatoria de Ayudas al Alquiler Joven 2018 del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

BDNS (Identif.) 403911

Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de junio de 2018 por el que se aprueba la Convocatoria de Subvención Ayuda al Alquiler Vivienda Joven 2018.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (<http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index>):

Primero. Beneficiarios:

Las personas interesadas en participar en la presente convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener una edad mínima de 18 años y no superar los 35 años en la fecha de solicitud.

b) Figurar inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes de Priego de Córdoba con un mínimo de seis meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud y que la vivienda alquilada objeto de subvención se encuentre ubicada en el término municipal de Priego de Córdoba.

c) Que el nivel de renta per cápita de la unidad familiar del/la solicitante, referido a los ingresos de la unidad de convivencia familiar sea inferior a los 1200 € mensuales

d) Que el/la solicitante, ni ninguno de los miembros de la unidad de convivencia, sean beneficiarios de subvenciones en materia de alquiler de vivienda de otras convocatorias de ésta u otra Administración Pública.

e) Que ningún miembro de la unidad de convivencia familiar posea vivienda principal o secundaria a título de propiedad, o sean cotitulares de otros inmuebles de naturaleza urbana o rústica -salvo que por herencia tenga menos del 25% de la vivienda.

f) No hallarse incurso/a en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

g) Estar al corriente con sus obligaciones tributarias, tanto estatales como locales, y con la Seguridad Social (en su caso).

Segundo. Objeto:

Pago de las rentas por alquiler de la vivienda habitual correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2018.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases que han de regir las Ayudas al Alquiler de Vivienda Joven del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27/02/2018, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 76 de 20 de abril de 2018.

Cuarto. Importe:

Importe total: 10.000 €. El importe máximo por subvención no podrá superar los 900 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Sexto. Otros datos:

1. Ordenadas las solicitudes y hasta agotar el crédito disponible, se otorgarán subvenciones de 150 €/mes, a aquellos solicitantes que alcancen una puntuación igual o superior a los once puntos; de 100 €/mes, a quienes obtengan una puntuación inferior a once puntos e igual o superior a los ocho puntos; de 50 €/mes a quienes alcancen una puntuación inferior a los ocho puntos. 2. Se abonará el 50% de la ayuda, una vez concedida la misma. El 50% restante se abonará previa justificación del gasto total realizado en el plazo máximo de 30 días desde la finalización del mes de diciembre de 2018. 3. Para solicitar información sobre el procedimiento de acceso a las subvenciones de la presente convocatoria, los interesados podrán dirigirse a la Delegación de Juventud sito en Plaza Palenque en horario de 9 a 14.00 h., teléfono: 957 76 47 07 correo electrónico: zonajoven@aytopriegodecordoba.es, o consultar directamente en la webmunicipal: www.aytopriegodecordoba.es

Priego de Córdoba, 15 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por el Alcalde-Presidente, José Manuel Mármol Servián.

Ayuntamiento de El Viso

Núm. 2.005/2018

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de Plan Económico-Financiero 2018/2019 por el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria y urgente de fecha siete de junio del corriente, el cual estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento <http://elviso.sedelectronica.es/info.0>

En El Viso, a 11 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por el Alcalde, Juan Díaz Caballero.

Entidad Local Autónoma de Encinarejo

Núm. 2.013/2018

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

De conformidad con lo prescrito en los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido de Régimen Local, y habida cuenta que la Corporación Local de la ELA de Encinarejo de Córdoba, reunida en Pleno su Órgano Superior Colegiado en Sesión Extraordinaria, cele-

brada con fecha 26 de diciembre de 2017 adoptó Acuerdo relativo a la Aprobación Provisional del Presupuesto General de la Corporación y Plantilla de Personal para el Ejercicio 2018 que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones ó alegaciones durante el periodo de Exposición al Público (Artículo 49.c, de la Ley 7/85), se hace constar que por Resolución de Presidencia de la ELA de fecha 23 de marzo de 2018, se ha elevado a definitivo el Presupuesto General para el ejercicio 2018:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo	Denominación	Importe Euros
A) Operaciones Corrientes		
1	Impuestos Directos	
2	Impuestos Indirectos	
3	Tasas y otros Ingresos	103.804,91
4	Transferencias Corrientes	1.189.172,41
5	Ingresos Patrimoniales	25,00
B) Operaciones de Capital		
6	Enajenación de Inversiones Reales	
7	Transferencias de Capital	92.575,24

8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.385.577,56

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Denominación	Importe Euros
A) Operaciones Corrientes		
1	Gastos de Personal	595.175,92
2	Gastos en Bienes Corrientes y Serv.	473.991,63
3	Gastos Financieros	5.701,00
4	Transferencias Corrientes	33.000,00
B) Operaciones de Capital		
6	Inversiones Reales	234.121,00
7	Transferencias de Capital	
8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	43.588,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.385.577,56

PLANTILLA DE PERSONAL
Equivalencia Ley 30/84 – Ley 7/2007

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Denominación	Número Plazas	Grupo	Escala	Subescala	Titulación Académica	Vacantes
Oficial Mayor – Letrado Asesor	1	A1	Adm. Especial	Técnico Superior	Licenciado en Derecho	No
Administrativos	2	C1	Adm. General	Administrativo	Bachillerato	No

PERSONAL LABORAL FIJO

Denominación	Número Plazas	Grupo (Categoría)	Titulación Académica	Vacantes
Arquitecto Técnico	1	II	Arquitectura Técnica	No
Director/a Centro Escuela Infantil	1	II	Diplomatura Maestra Educación Infantil	No
Técnico Deportivo	1	III	Bachillerato	No
Coordinador Social y Juventud	1	III	Bachillerato	No
Técnico de Programas Operativos	1	III	Bachillerato	No
Educador/a Infantil	2	III	Técnico Superior Educ. Infantil-FP2	No
Oficial Parques y Jardines	1	IV	Graduado Escolar	No

PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA 104 LBRL y 12 LEY 7/07

Denominación	Número Plazas	Grupo	Nivel	Titulación Académica	Vacantes
PLD Asesor Presidencia en Materia de Gestión Local	1	C1	14	Bachillerato	No

PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA

Fuera de la Plantilla de Personal

Denominación Puestos de Trabajo	Número de Puestos	Titulación Académica	Duración Contrato	Observaciones
Sin Determinar (PFEA, PIJ,...)	Sin determinar	Sin determinar	Sin determinar	Auxiliares, Operarios, ..., según necesidades surgidas.

RESUMEN:

Número total de puestos de trabajo	12 puestos
Número total de funcionarios de carrera	3 puestos
Número total de personal laboral fijo	8 puestos
Número total de personal eventual libre designacion	1 puesto
Número total de personal laboral de duración determinada	Sin determinar

De acuerdo con el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Encinarejo de Córdoba, siendo el día 11 de junio de 2018.

Firmado electrónicamente por el Presidente de la ELA, Miguel Ruiz Madruga.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 3
Córdoba

Núm. 1.904/2018

Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba
Procedimiento: 1260/17 Ejecución de títulos judiciales 160/2017
De: Doña María Dolores Arroyo Nadales
Contra: Don/doña Boutahar Alkhouh

DOÑA MARINA MELÉNDEZ-VALDÉS MUÑOZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 160/2017 a instancia de la parte actora doña María Dolores Arroyo Nadales contra don/doña Boutahar Alkough, se ha dictado resolución de fecha 3-5-18, cuya parte dispositiva sustancialmente dice:

"Parte Dispositiva

Dispongo:

1. Declarar terminado el presente procedimiento de Jura de Cuentas por caducidad en la instancia, sin perjuicio de que por la parte interesada se formule la reclamación que proceda ante la jurisdicción civil.

2. Archivar el presente procedimiento".

Y para que sirva de notificación al demandado Boutahar Alkough actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de La Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 28 de mayo de 2018. Firmado electrónicamente por la Letrada de la Administración de Justicia, Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

**Juzgado de lo Social Número 4
Córdoba**

Núm. 1.905/2018

Juzgado de lo Social Número 4 de Córdoba

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 329/2017

De: Doña Elena Moyano Vereda

Abogado: Don Tomás García Cerezo

Contra: Fogasay Rent Km-5 SL

DOÑA DOLORES DE LA RUBIA RODRÍGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 329/2017 a instancia de la parte actora doña Elena Moyano Vereda contra Fogasa y Rent Km-5 SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

"Fallo

Que estimando básicamente la demanda que ha originado estos autos, formulada por Dña. Elena Moyano Vereda contra Rent Km-5 SL, debo de condenar y condeno a la esta última a que pague a la primera la suma total de 2.127,97 € (Dos mil ciento veintisiete euros con noventa y siete céntimos), de la que responderá el Fogasa en los supuestos y dentro de los límites legalmente establecido.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, advirtiéndoseles que es firme (Disposición transitoria segunda, apartados 1 y 2, así como artículo 191.2.g) LRJS 36/2011)".

Y para que sirva de notificación al demandado Rent Km-5 SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 24 de mayo de 2018. Firmado electrónicamente por la Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores de la Rubia Rodríguez.